

Id. Cendoj: 28079220042016100015
Organo: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
Sede: Madrid
Sección: 4
Tipo de Resolución: Sentencia

Fecha de resolución: 27/04/2016

Nº Recurso: 3/2014

Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO

Procedimiento: PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO

Idioma: Español

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN 4ª

ROLLO PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 3/2014

SUMARIO (PROCEDIMIENTO ORDINARIO) Nº 6/2014

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

20107

N.I.G.: 28079 27 2 2010 0009946

SENTENCIA Nº 19/2016

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DÑA. ÁNGELA MARÍA MURILLO BORDALLO (Presidente)

DÑA. CARMEN PALOMA GONZÁLEZ PASTOR

DON JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO (Ponente)

En Madrid, a veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

Vista en juicio oral y público, ante esta Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 6 bajo el nº 6/14, seguida por el trámite del Sumario ante la posible comisión de UN DELITO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ORGANIZACIÓN TERRORISTA y DOS DELITOS DE ASESINATO TERRORISTA EN GRADO DE CONSPIRACIÓN, en cuyo procedimiento aparece como acusado Eugenio, mayor de edad, nacido el día NUM000-1965 en Galdácano, Vizcaya (España), hijo de Gervasio y de Fidela, de nacionalidad española, con documento nacional de identidad nº NUM001, sin antecedentes penales y privado de libertad preventivamente en esta causa desde el día 10-6-2014, representado por el Procurador D. Javier Cuevas Rivas y defendido por la Abogada Dº Eukene Jauregi Lejona.

Ejerce la acusación en este procedimiento el MINISTERIO FISCAL, que está representado por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Carballo Cuervo.

Ha actuado como ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO, que expresa el parecer unánime del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 6-10-2010 se incoaron las Diligencias Previas nº 279/10 por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, en virtud de la solicitud formulada por la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya, a través del Servicio TEPOL, para proceder a la autorización de observación telefónica de varias líneas utilizadas por diversas personas, ante las sospechas sobre perpetración de conductas relacionadas con actividades favorecedoras de la organización terrorista ETA. En varias ocasiones se solicitan, se autorizan y se prorrogan observaciones telefónicas, entre ellas dos líneas usadas por el ahora juzgado Eugenio. Sin embargo, ante la falta de justificación de la posible comisión de conductas delictivas, por auto de 6-10-2011 se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que vino precedido por la solicitud de cese de las intervenciones telefónicas formulada por la Guardia Civil.

El día 10-2-2014, por oficio procedente de la Unidad Central Especial nº 1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, se solicitó la expedición de una Comisión Rogatoria dirigida a las autoridades judiciales francesas, reclamando el testimonio de diversa documentación incautada en Francia a significados miembros de ETA, concretamente la contenida en los denominados Sellos CH/005, MAR/14, VW/73 y VW/67. Petición que fue concedida por autos de 12-2-2014 y 28-4-2014.

Con motivo de la presentación del informe de la Guardia Civil nº 19/14, de 3-6-2014, en el que aparece como investigado el ahora acusado Eugenio, el día 9-6-2014 se dictó auto de reapertura de las Diligencias Previas nº 279/10, acordándose igualmente las entradas y registros solicitados en su domicilio, en su lugar de trabajo y en otro inmueble que utilizaba, con detención del investigado el día 10-6-2010.

Las Diligencias Previas nº 279/10 fueron transformadas en el Sumario nº 6/14 por auto dictado el 17-6-2014, en cuyo procedimiento se dictó auto de procesamiento contra el único implicado el día 25-2-2015.

El 20-7-2015 se dictó auto de conclusión del sumario, siendo repartida la causa para su enjuiciamiento a esta Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,

donde se había formado el presente rollo P.O. n° 3/14 el día 20-6-2015. La conclusión del sumario fue revocada por auto de 1-9-2015, a fin de que se practicaran varias diligencias de índole documental interesadas por el Ministerio Fiscal. Una vez cumplimentadas, la causa nuevamente es remitida a este Tribunal, donde es recibida el 14-10- 2015, dictándose el 18-12-2015 auto confirmando la conclusión del sumario y de apertura del juicio oral, y el 8-2-2016 auto de admisión e inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes y de señalamiento del juicio oral, a celebrar durante los días 4, 5, 6 y 7-4-2016.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones elevadas a definitivas, calificó los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de participación activa en organización terrorista, previsto en los artículos 571 y 572.2 del Código Penal en su redacción actual, y en el artículo 571.2 del Código Penal en su redacción vigente en el momento de comisión de los hechos; así como de dos delitos de asesinato terrorista en grado de conspiración, previstos en los artículos 17.1 y 3 y 139.1, en relación con los artículos 573 y 573.1° bis del Código Penal en su redacción actual, y en los artículos 17.1 y 3 y 139.1 en relación con el artículo 572.2.1ª del Código Penal en su redacción vigente en el momento de comisión de los hechos.

De dichos delitos considera autor criminalmente responsable al acusado Eugenio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, para quien interesó la imposición de las penas de 10 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo, por el primer delito, y las penas de 15 años de prisión, con las accesorias legales conforme a los artículos 141 y 579.3 del actual Código Penal, por cada uno de los dos restantes delitos, además de las costas procesales.

Finalmente, conforme al artículo 579 bis 1 del actual Código Penal y al artículo 579.2 del Código Penal vigente en el momento de comisión de los hechos, también solicitó que se le imponga la pena de inhabilitación absoluta por duración en 15 años superior a las penas privativas de libertad a imponer, y conforme a los artículos 48 y 57 del

Código Penal, deberá asimismo imponérsele la prohibición de aproximarse al lugar de los hechos y al domicilio de la víctima por un plazo de 10 años.

TERCERO.- La defensa del acusado Eugenio, en sus conclusiones definitivas, solicitó la libre absolución de su patrocinado.

Alternativamente, para el caso de considerar que el nombrado participó en la planificación del asesinato de Carlos Miguel y Juan Pedro a cometer el 19-6-2010, ha de ser aplicado el artículo 16.3 del Código Penal, que contempla el desistimiento voluntario exento de responsabilidad penal, porque tanto ETA como el acusado decidieron de forma voluntaria cesar las acciones armadas ofensivas en febrero de 2010.

CUARTO.- El juicio se celebró durante las audiencias de los días 4, 5 y 6 de abril de 2016.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Ha quedado acreditado en autos que el acusado Eugenio, mayor de edad y sin antecedentes penales, es desde al menos 2008 hasta que fue detenido el 10 de junio de 2014, miembro integrante "legal" de la organización terrorista ETA (es decir, militante que realiza labores a favor de dicha banda armada o está a su disposición y cuya adscripción pasaba desapercibida para las fuerzas de seguridad), siendo conocido en la organización con los alias de "Zurdo", "Farsante", "Raton" y "Bucanero".

Con esas denominaciones, aparece en diversas agendas de dirigentes y miembros de comandos armados de ETA, en las que se establecían citas con él para realizar cursillos de adiestramiento e instruirle sobre distintos aspectos de la actividad terrorista.

Los datos sobre el contenido de tales agendas, sus usuarios y las concretas anotaciones alusivas al acusado, serán mencionados a continuación.

A) El día 17 de noviembre de 2008, fue detenido en la localidad de Cauterets (Francia) Constancio, alias "Pesetero", quien en el momento de su detención ejercía las funciones de jefe del aparato militar de la organización terrorista ETA. Detención que se produjo en un hotel de dicha localidad, en una de cuyas habitaciones se encontraba en compañía de la también integrante de la banda terrorista Estibaliz.

Con ocasión de los registros practicados por funcionarios policiales franceses, fueron incautadas diversas memorias informáticas y diversa documentación en soporte papel. Entre esta última, se le halló una agenda del año 2008 de la marca "Lecas", referenciada por las autoridades judiciales francesas como "Sello CH/005", la cual contenía anotaciones desde el día 18 de noviembre de 2008 hasta el día 30 de diciembre de 2008.

Entre las anotaciones correspondientes al domingo 23 de noviembre de 2008, aparece una con el siguiente texto: "Raton 11.20 Jimbe. mask : lesanu". Del estudio de ésta y de las demás anotaciones contenidas en dicha agenda, se deduce que "Raton" se trata del alias utilizado por algún individuo integrado en ETA, y el resto de los datos de la anotación hacía referencia codificada sobre la hora (11:20 horas) y el lugar para mantener una cita con la persona que se responsabilizaba de mantener contactos con dicho individuo. Por lo que "Raton" era un individuo integrado en la organización terrorista ETA, el cual tenía previsto una cita con Constancio (alias "Pesetero"), a las 11:20 horas del domingo 23 de noviembre de 2008, en un lugar codificado y que no ha sido posible descifrar.

Cita de "Raton" con Constancio que no se pudo materializar, porque este último fue detenido el día 17 de noviembre de 2008, seis días antes de la reunión programada, siendo sustituido "Pesetero" como jefe militar de ETA por Octavio, alias "Zanagollas".

B) El día 18 de abril de 2009 fue detenido, en la localidad francesa de Montauriol, Jose Manuel, alias "Gamba", cuando se encontraba junto a los también miembros de ETA Pedro Jesús y Augusto. "Gamba" pertenecía al llamado aparato militar de ETA y se dedicaba al adiestramiento de nuevos militantes.

Entre la documentación intervenida por la Policía francesa en el momento de su detención, se incautó una agenda del año 2009, referenciada por las autoridades judiciales francesas como "Sello MAR/14", con diversas anotaciones manuscritas.

En la hoja correspondiente al sábado día 1 de agosto de 2009, figura una con el siguiente tenor literal: "Farsante 10 00", precedida de otra que dice: "Berria 13:35". Esta última hace referencia a la hora (13:35 horas) para mantener una cita con un individuo al cual su autor conoce como "nuevo" (que es la traducción de la lengua euskera de la palabra "berria"), en alusión a un individuo recientemente "captado" por la organización. En cambio, la otra anotación está relacionada con otra cita a las 10:00 horas del mismo sábado día 1 de agosto de 2009, con un individuo al que se le conoce como "Farsante", del que nada se dice sobre que fuera nuevo en la organización.

Tampoco esta reunión pudo llegar a efectuarse, puesto que Jose Manuel, alias "Gamba", fue detenido el día 18 de abril de 2009, cuatro meses antes de la cita anotada.

C) El 4 de julio de 2009 fueron detenidos, en la localidad francesa de Pau, los miembros de la organización terrorista ETA Erica, Ezequias y Gumersindo, a quienes se incautó numerosa documentación, tanto en soporte papel como en soporte informático. Dicha documentación la llevaban consigo, o bien fue intervenida en el vehículo de la marca Volkswagen Passat, sustraído y con placas de matrículas falsas, que utilizaban para sus desplazamientos y tenían aparcado cerca del lugar de las detenciones. Los tres detenidos ejercían, entre otras, labores de inventariado y control de los "zulos" de armas y explosivos dependientes de la estructura "USA" del aparato militar de ETA.

Tras los registros realizados, los funcionarios policiales franceses incautaron varios ordenadores personales, una gran cantidad de soportes informáticos, así como diversas agendas y libretas con anotaciones. Entre dichas agendas, destacan las dos siguientes, encontradas en uno de los bolsillos centrales de un bolso de mujer intervenido en la detención:

a) Agenda del año 2 00 9 de la marca "Quo Vadis", la cual se encuentra referenciada por las autoridades judiciales francesas como "Sello VW/73". La agenda se compone de 27 páginas, figurando inicialmente un calendario con una serie de anotaciones y seguidamente la agenda propiamente dicha. En la parte final de la misma aparecen varias anotaciones sueltas, algunas de ellas referentes a detalles de contabilidad, "zulos" y otras a modo de recordatorio.

Entre las anotaciones de la hoja correspondiente al sábado 1 de agosto de 2009, que se encuentran parcialmente codificadas, figura una con el siguiente texto: "KbinCxastres A1-A2 Bucanero ik!". Ik es la abreviatura de "ikastaro", cuya traducción de la lengua euskera es la de "cursillo". En cuanto a "Bucanero", hace referencia a una persona a la que se le conoce con ese apodo, y a quien iba dirigido ese cursillo. Respecto a la anotación "KbinCxastres", alude a la localidad francesa de Castres, apareciendo una especie de x por encima de la C. Las menciones "A1-A2" están relacionadas con la palabra "Abuztua", que significa en euskera "agosto". Y los números se corresponden con los días 1 y 2 del mes de agosto de 2009.

Por lo que la anotación: "KbinCxastres A1-A2 Bucanero ik!", se refiere a la realización de un cursillo durante los días 1 y 2 de agosto para una persona a la cual la organización terrorista ETA conoce con la siglas "Bucanero".

b) Agenda del año 2009 de la marca "Rhodia", la cual se encuentra referenciada por las autoridades judiciales francesas como "Sello VW/67". Esta agenda tiene 17 páginas y en ella constan diversas anotaciones sobre gastos realizados, detalles sobre "zulos" y anotaciones a modo de recordatorio de citas. En su página 6 figuran varias anotaciones

relacionadas con siglas de varias estructuras de ETA y apodos orgánicos de varios de sus militantes.

Una de tales anotaciones es "Zurdo ik A1". Hace referencia al apodo orgánico de una persona: "Zurdo", cuya traducción de la Lengua euskera es "jabalí". "Ik" alude a la abreviatura de "ikastaro", cuya traducción de la lengua euskera ya hemos dicho que es la de "cursillo". La letra "A" hace referencia a la palabra "abuztua", cuyo significado en euskera también hemos indicado que es "agosto", y el número "1", se trata del día del mes. Por lo que la fecha del cursillo para una persona a la cual la organización terrorista ETA conoce con la sigla "Zurdo" es la del 1 de agosto de 2009.

Del análisis del contenido de las anotaciones recogidas en las cuatro agendas mencionadas se ha podido constatar que las alusiones a "Zurdo", "Bucanero", "Farsante" y "Raton" en ellas recogidas, hacen referencia a la misma persona, que se corresponde con un miembro "legal" de ETA, al que la organización terrorista presta especial interés, ya que aparece en las anotaciones en solitario y en agendas de significados miembros de ETA, a efectos de quedar con él para instruirle sobre las tácticas que ETA imparte a sus militantes.

Dicho miembro de ETA conocido como "Zurdo", "Bucanero", "Farsante" y "Raton" es el acusado Eugenio, como pudo comprobarse con el resultado de las tareas de vigilancia y seguimiento que desarrollaron funcionarios policiales franceses y españoles en la localidad francesa de Castres el anotado día 1 de agosto de 2009 y con posterioridad a dicha fecha, como especificamos en el siguiente apartado.

SEGUNDO.- Para comprobar la realidad del encuentro programado por ETA en la ciudad francesa de Castres con el conocido como "Zurdo" y "Bucanero", según se recoge en las dos agendas de las marcas "Quo Vadis" y "Rhodia" intervenidas el 4 de julio de 2009 a los miembros de la organización terrorista ETA Erica, Ezequias y Gumersindo, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, de manera conjunta con los Servicios de Información homólogos de la Policía Nacional francesa, decidieron establecer un dispositivo de vigilancia y control operativo sobre aquella ciudad francesa

(situada a unos 400 kilómetros de la frontera con España por Irún-Hendaya) el sábado día 1 de agosto de 2009, aludido en dichas agendas.

Por ello, a primera hora del referido día se instaló un dispositivo de vigilancia sobre distintas zonas del centro de la localidad francesa de Castres, detectándose sobre las 9:00 horas la llegada de un vehículo Peugeot 307 de color gris con placas de matrícula españolas PHP, el cual circulaba conducido por un individuo, único ocupante del vehículo, que estacionó en la Place l'Albinque de la ciudad. Seguidamente, dicho conductor se bajó del vehículo y caminó hasta las inmediaciones de la Oficina de Turismo de Castres, donde entró. Consultada la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la titularidad del vehículo, se correspondía con el acusado Eugenio, con D.N.I. n° NUM001, nacido el NUM000 de 1965 y con domicilio en la CALLE000 n° NUM002-NUM003NUM004 de la localidad de Galdacano (Vizcaya), el cual resultó coincidir con la persona que en aquellos momentos hacía uso del vehículo, según se dedujo del cotejo fotográfico realizado con los datos existentes en las bases del Documento Nacional de Identidad.

Sobre las 10:00 horas, el acusado Eugenio salió de la Oficina de Turismo de Castres, y se unió a un individuo desconocido que se encontraba en el exterior, sin mediar señuelo ni código alguno de identificación entre ambos, lo que denota que ya se conocían, quienes se marcharon juntos del lugar. En aquel momento no se consiguió identificar a dicho individuo.

Los dos caminaron juntos por distintas calles de la localidad de Castres, hasta llegar a la Place L'Albinque, donde se encontraba estacionado el vehículo del acusado Peugeot 307 con matrícula PHP. Ambos se montaron en el citado vehículo, que circuló por diferentes calles del centro de la localidad, realizando distintos cambios de sentido, hasta que estacionó en la Rue Roucayrol. Entonces, los dos se bajaron del turismo y comenzaron a caminar adoptando determinadas medidas de seguridad, como cambios de sentido de manera repentina y paradas inesperadas en la calle para observar a las personas que transitaban a su alrededor y comprobar si les infundían sospechas. Por estas circunstancias, los efectivos policiales desplazados decidieron

disminuir el control directo de los vigilados y establecer un perímetro más amplio de seguridad, para evitar ser descubiertos, llegando a perder el control sobre los dos citados individuos.

Como quiera que el vehículo Peugeot 307 con matrícula PHP seguía aparcado en el mismo lugar en que fue dejado, es decir, en la Rué Roucayrol de la ciudad de Castres, el dispositivo de vigilancia y control operativo permaneció desplegado en el lugar durante todo el día y toda la noche, a fin de volver a tomar contacto con los dos individuos objetos de observación.

Dicha reanudación del contacto se produjo en la mañana del día siguiente, domingo día 2 de agosto de 2009, sobre las 12 25 horas, y sólo respecto al acusado Eugenio, quien se acercó caminando a su vehículo Peugeot 307 de color gris y con matrícula PHP, se montó en él y abandonó la ciudad de Castres, dirigiéndose hasta la frontera entre Francia y España, la cual rebasó por el paso fronterizo de Irún/Hendaya, para continuar circulando hasta la localidad de Galdácano (Vizcaya), donde sobre las 18:15 horas estacionó en las inmediaciones de su domicilio.

Acerca de la identidad del individuo con el que contactó, acompañó y estuvo instruyéndose el acusado en su viaje a Francia del 1 y 2 de agosto de 2009, pudo averiguarse dos meses después, con motivo de la detención, el día 11 de octubre de 2009 en la localidad francesa de Rivieres, en una operación conjunta de la Policía Nacional francesa y de la Guardia Civil española, de los miembros de la organización terrorista ETA Jenaro y Nicolas. Ambos estaban descargando un "zulo", en cuyo interior se halló material explosivo (pentrita), temporizadores, cordón detonante y cuatro armas cortas, además de otro diverso material. Precisamente después de efectuar los cotejos dactilares y fotográficos de los dos detenidos, que confirmaron su verdadera identidad, a Nicolas se le reconoció, sin lugar a dudas, como el individuo que el día 1 de agosto de 2009 mantuvo el descrito encuentro con el acusado en Castres, del que en su momento se realizó un reportaje fotográfico, antes de poder escabullirse de la vigilancia policial y dirigirse al lugar desconocido donde se instruyó y adiestró al acusado durante aquellos dos días de primeros de agosto.

Las anteriores no fueron las únicas citas orgánicas que se ha constatado que tenía concertadas el acusado Eugenio con algún miembro de la organización terrorista ETA.

El nombrado acusado, después de la cita y estancia de los dos primeros días de agosto de 2009 en Castres (Francia), mantuvo una actividad normal, aunque en ocasiones se le observó cómo en momentos puntuales adoptaba medidas de seguridad, tanto en sus desplazamientos a pie como cuando hacía uso de su vehículo.

Pero el domingo 2 de mayo de 2010 se le observó una acción distinta a sus pautas de comportamiento habituales. Dicho día, a primera hora de la mañana, salió de su domicilio en Galdacano y se dirigió solo, en su vehículo particular Peugeot 307 de color gris con matrícula PHP, a la localidad vizcaína de Zoilo. Sobre las 8:30 horas estacionó su vehículo en la mencionada localidad, se apeó del coche e inició la ascensión hacia la cima del monte Ganekogorta por su cara sur. Unos minutos más tarde accedió a la cumbre del monte Ganekogorta y se resguardó en un lateral. A las 11:00 horas se acercó al punto geodésico donde se encuentra situada la mesa de orientación y colocó una naranja sobre la mesa, a modo de contraseña o señuelo de su presencia, dirigida a la persona desconocida de la organización terrorista ETA con la que debía entrevistarse, mientras se comía una manzana, manteniéndose en actitud de espera durante un cuarto de hora aproximadamente. Pasados esos quince minutos y sin haber tenido contacto con persona alguna, al resultar fallida la cita, el acusado inició el descenso a través de la ladera sur del monte Ganekogorta. Llegó al lugar donde se encontraba estacionado su vehículo y con él regresó a su domicilio en la localidad de Galdacano.

TERCERO.- En cambio, no ha quedado acreditado que fuera el acusado Eugenio quien, siguiendo los mandatos de ETA y con un fusil con mira telescópica que le sería facilitado, estuviera preparando una acción contra la vida del Lehendakari Carlos Miguel y del Consejero de Interior Juan Pedro, aprovechando la realización del acto de homenaje que, en e) bilbaíno Barrio de La Peña, se iba a celebrar en el primer

aniversario de la muerte violenta con bomba "Iapa" del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía Juan Ramón, acaecida el 19 de junio de 2009.

Como tampoco ha quedado acreditado que fuera el acusado Eugenio la persona que debía de reunirse con los miembros de ETA Eleuterio y Asunción en la cima del monte Ganekogorta en los dos primeros domingos de marzo de 2010 para planificar dicha acción terrorista.

A este respecto, consta en autos que en la madrugada del día 1 de marzo de 2011, la Guardia Civil procedió a la desarticulación del comando legal de ETA denominado "Otazua", con la detención en Bilbao (Vizcaya) de Eleuterio (alias "Nota"), Asunción (alias "Tamara") y María Inmaculada, y en Galdácano (Vizcaya) de Oscar (alias "Rana"). Llevaban operativos desde 2006, y desde entonces hasta su detención realizaron muchas acciones terroristas algunas de ellas ya juzgadas y sentenciadas- y estaban a las órdenes de los últimos dirigentes del aparato militar de ETA Constancio (alias "Pesetero") y Octavio (alias "Zanagollas"). Se les incautaron diversas armas y material explosivo.

Por lo que se refiere a Eleuterio, en su segunda declaración como detenido, prestada ante la Guardia Civil a presencia de Letrado de oficio en la noche del 4 de marzo de 2011, y luego en su declaración como imputado ante el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 3, manifestó que en una de las citas que tuvo con "Zanagollas", éste le comentó la posibilidad de perpetrar una acción violenta contra el Lehendakari Carlos Miguel y el Consejero de Interior del Gobierno Vasco Juan Pedro, en el barrio de La Peña, coincidiendo con el aniversario de la muerte del Policía Juan Ramón, mediante un fusil con mira telescópica, para lo cual les facilitó una cita en el monte Ganekogorta con la persona que supuestamente iba a efectuar los disparos, que era cazador y participante en concursos de tiro; a dicha cita acudieron el declarante, su novia Asunción y Oscar, accediendo a la cima del monte solamente "Rana" (Oscar), permaneciendo el dicente y Asunción en una zona más baja situada en el monte Pagasarri; al desconocer los tres la identidad de la persona elegida para realizar el

disparo, se acordó que ésta debía acudir con una vestimenta determinada, pero finalmente no acudió a la cita.

Por lo que se refiere a Asunción, en su segunda declaración como detenida ante la Guardia Civil, a presencia de Letrado de oficio, manifestó en la madrugada del 5 de marzo de 2011 (aunque luego no lo ratificó en su declaración como imputada ante el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 3), que en una cita con "Zanagollas" en un hotel de París, en la que durante dos noches les impartió un cursillo de informática, el dirigente de ETA les dijo que la furgoneta interceptada en Portugal (en realidad fue intervenida el 9 de enero de 2010 en la cercana localidad Zamorana de Bermillo de Sayago) era la destinada a volar las Torres KIO de Madrid, dándoles además dos tarjetas de memoria, conteniendo una de ellas el programa LINUX y la segunda con dos citas que debían mantener; la primera de ellas era con un señor de unos 45 años, bajito, gordo y con cabeza grande, el cual habla sido en el servicio militar tirador selecto, teniendo por objetivo la reunión el comentarle que con ocasión del homenaje al Policía fallecido en La Peña, efectuase un disparo sobre una personalidad que acudiese al acto, concretamente contra el Lehendakari Carlos Miguel; el día de esta primera cita era el primer domingo de marzo (día 7 de marzo de 2010), en el monte Ganekoqorta, a donde debían acudir con un gorro rojo y una pieza de fruta en la mano, sentándose en la cima del monte; a dicho lugar subió Oscar, mientras que Eleuterio y ella permanecían abajo realizando contravigilancias; la cita estaba programada para las 11:00 horas, pero al no aparecer el hombre con el que debían mantener contacto a las 11:15 horas, Oscar se marchó del lugar, volviendo de nuevo al mismo una hora después, a las 12:00 horas; como a ese segundo contacto tampoco acudió la otra parte, Oscar comenzó el descenso, reuniéndose con la dicente y su pareja cerca del refugio en el inicio de la subida al Ganekogorta, y desde allí bajaron el monte, regresando cada uno a su domicilio. Termina Asunción manifestando que la segunda cita que debían mantener con este hombre desconocido era el domingo siguiente (14 de marzo de 2010), pero en ese intervalo recibieron una nota de la organización terrorista en la que se les indicaba que debían parar su actividad, motivo por el cual no acudieron a la cita.

Y tampoco ha quedado probado que el acusado Eugenio sea un tirador selecto, ni que haya participado en concursos de tiro, ni que tuviera cita con los miembros del comando "Otazua" de ETA los días 7 y 14 de marzo de 2010 en la cima del vizcaíno monte Ganekogorta.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Calificación jurídica de los hechos declarados probados.

A) Los hechos declarados probados, en lo que afecta al acusado Eugenio, son constitutivos de un delito de pertenencia a organización terrorista, previsto en los artículos 571 y 572.2 del Código Penal en su redacción actual, que se corresponde con el tipo del artículo 571.2 del Código Penal vigente en el momento de ocurrir los hechos. De dicho delito es autor el mencionado, por su directa, material y voluntaria ejecución, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

En los dos primeros apartados de la descripción fáctica que hemos efectuado anteriormente nos hemos referido a la adscripción del acusado, como militante "legal" de la organización terrorista ETA, que ostenta las características de estabilidad, estructuración y jerarquización, por cuya inclusión recibía cursillos de formación en un amplio margen temporal, que discurre desde 2008 hasta que fue detenido a mediados de 2014, quedando siempre a disposición de la banda terrorista por su condición de miembro de la misma, con cierta prevalencia, puesto que en otro caso no ostentaría un alias específico ("Zurdo"), con hasta tres variantes ("Farsante", "Raton" y Bucanero") y no sería individual y expresamente nombrado en agendas de relevantes miembros del aparato militar de la organización y de uno de sus comandos activos. Por tanto, desde al menos el año 2008, existe constancia de que el acusado formaba parte de la mencionada banda terrorista, acudiendo a las citas que le iban planificando los dirigentes y grupos ya formados de ETA.

B) En cuanto a los requisitos del delito de integración en organización terrorista y sus diferencias con el delito de colaboración con organización terrorista, las acciones del acusado se encuentran revestidas de las características de intensidad, estabilidad y permanencia que obligan a descartar cualquier atisbo de comisión del segundo de los delitos nombrados.

Debemos recordar que la S.T.S. n° 1140/10, de 29-12-2010, establece que "la pertenencia impone por sí misma una prestación de algún tipo de servicio para los fines de la organización, ya en el campo ideológico, económico, logístico, de aprovisionamiento o de ejecución de objetivos, de mayor intensidad que las conductas de colaboración previstas en el artículo 576 (actual artículo 577)". Sigue manifestando dicha resolución que, conforme a las STS. n° 503/08, de 17-7-2008, n° 888/07, de 25-10-2007, n° 119/07, de 16-2-2007, n° 556/06, de 31-5-2006, y n° 1127/02, de 17-6-2002, "los requisitos que se exigen para que se esté ante un delito de integración con organización terrorista o banda armada son los siguientes:

a) Como sustrato primario, la existencia de una propia banda armada u organización terrorista, que exige pluralidad de personas, existencia de unos vínculos y el establecimiento de relaciones de cierta jerarquía y subordinación. Tal organización tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden democrático- constitucional, en definitiva actuar con finalidad política, de modo criminal. Su estructura será compleja, pues sus componentes pueden abarcar diversas facetas o actuaciones (informativas, ejecutivas u operativas en cualquier orden, para la consecución de sus fines, uno de cuyos componentes será la comisión delictiva indiscriminada, con objeto de coaccionar socialmente para la imposición de sus objetivos finales.

b) Como sustrato subjetivo, tal pertenencia o integración requiere un carácter más o menos permanente, pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración

que, por razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan en la finalidad que persigue el grupo".

C) Ciñéndonos a la nota de permanencia, como definidora del delito de integración en organización terrorista, debemos destacar que, como hemos expresado en el relato fáctico, el acusado mantuvo durante seis años una relación estable y subordinada a la estrategia de la organización a la que pertenecía, comenzando en 2008 y acabando en junio de 2014; siguió las directrices de la organización y trató con miembros relevantes de ella, granjeándose su confianza y consideración. Esta relación dilatada en el tiempo propició que el acusado permaneciera a disposición de la organización para la eventual realización de los criminales actos que le son propios, contribuyendo así a la propia existencia de la organización y a la perpetuación de sus acciones.

En este sentido se pronuncia la S.T.S. n° 503/08, de 17-7-2008 (que enjuició los atentados del 11-M), al manifestar que "la pertenencia supone la integración de manera más o menos definitiva, pero superando la mera presencia o intervención episódica, y sin que signifique necesariamente la participación en los actos violentos característicos de esta clase de delincuencia, pues es posible apreciar la pertenencia a la organización como integrante de la misma cuando se desempeñan otras funciones diferentes como consecuencia del reparto de cometidos propio de cualquier organización, a la que no es ajena la de carácter criminal".

D) Los delitos de organización suponen una anticipación de la punibilidad, en la medida en que se trata de delitos de mera actividad y peligro abstracto, requiriendo la pertenencia una continuidad en el tiempo, un carácter de cierta permanencia que expresarla la comunión de fines (ilícitos) con la asociación y la voluntad de integración en la organización o grupo.

La pertenencia supone la subordinación del individuo a los designios y fines de la estructura organizada con un carácter intenso; una integración más o menos definitiva, que debe trascender la mera presencia o intervención episódica, aunque no requiera necesariamente la participación en los actos violentos contra las personas y bienes,

que son las conductas paradigmáticas del terrorismo. Supone una disponibilidad efectiva para el ejercicio de distintos actos, en un principio indeterminados, de favorecimiento de las actividades de todo tipo realizadas por la organización terrorista en el contexto de sus propios fines.

Después de estas necesarias digresiones doctrinales, en el siguiente apartado vamos a analizar la prueba en que basamos la atribución criminal dirigida contra el acusado.

SEGUNDO.- Acreditación de los hechos declarados probados.

Los hechos declarados probados en los apartados primero y segundo de la narración táctica de esta sentencia, aparecen plenamente acreditados a través de las pruebas practicadas en el acto del juicio, consistentes en las declaraciones del acusado nombrado; las testificales-periciales y las testificales de los funcionarios de la Guardia Civil que llevaron a efecto la investigación de los hechos producidos y el análisis de los documentos que involucran al acusado; las restantes testificales de personas particulares; los dictámenes periciales sobre el estado físico-psíquico en que se encontraba el acusado durante el tiempo de sus declaraciones y posteriormente, y la documental incorporada a las actuaciones.

A) Respecto a las declaraciones del acusado Eugenio, éste en el plenario prácticamente se ratificó, con relevantes incorporaciones hasta entonces no mencionadas en anteriores oportunidades procesales, en lo que ya había dicho durante las manifestaciones que prestó ante el Magistrado Instructor en calidad de imputado.

Como detenido, se negó a declarar ante la Guardia Civil e insistió que sólo lo haría ante el Juez (folio 1171 de la causa). Como imputado, de modo genérico negó que tuviera relación con los hechos investigados y relató profusamente los supuestos malos tratos que recibió durante los tres días que estuvo incomunicado (folio 1242 y CD incorporado en el sobre unido al folio 1272). Como procesado, manifestó en su indagatoria (folio 1795), que no estaba de acuerdo con lo relatado en el acto de

procesan lauco y negó su participación en cualquiera de los hechos que se le atribuyen. Hasta entonces nada había dicho sobre sus desplazamientos al sur de Francia y al monte vizcaíno de Ganekogorta, centrándose en la supuesta realización de malos tratos físicos y verbales por parte de los funcionarios que le custodiaban desde que salieron en coche hacia Madrid.

En el juicio, a preguntas sólo de su defensa, el acusado negó que perteneciera a ETA o colaborase con ETA, negando asimismo que se le conociera como "Zurdo", no habiendo tampoco participado en un plan para asesinar al entonces Lehendakari Carlos Miguel y a su Consejero de Interior Juan Pedro. Admitió que en 2008 recibió en el buzón de su casa una carta de ETA que ni siquiera leyó, porque se asustó y la rompió. Dijo que con posterioridad, en la primavera de 2009, recibió una segunda carta en la que se le proponía colaborar con ETA, y para responder le daban una fecha y un lugar donde acudir con su respuesta; para dejar zanjado el tema decidió acudir a la cita, que era en Francia, con el argumento de que tenía trabajo fijo y dos hijos a los que educar; la cita ocurrió junto al Ayuntamiento de la localidad francesa de Castres a principios de agosto de 2009, identificándose él con un periódico que llevaba en la mano, acercándosele un hombre joven, que le dijo que le siguiese por diversas calles, hasta que ambos cogieron un vehículo a las afueras de la ciudad, yendo por un camino sin asfaltar a una zona boscosa, donde en un claro había una tienda de campaña; desde el principio el declarante reiteró a su interlocutor que se negaba a participar y colaborar con ETA y que tenía hijos menores, siendo su intención volverse a su pueblo, pero el individuo joven le dijo que ese día no podía volver a buscar su coche y tendría que quedarse a dormir en la tienda de campaña, marchándose el joven, quien volvió a la mañana siguiente, para trasladarlo a las inmediaciones de Castres, donde caminó hacia su coche, lo cogió y se marchó a Galdácano pasado el mediodía. En relación a la subida al monte Ganekogorta, acaecida el 2-5-2010 por la mañana, manifestó que lo hizo porque quería ver los restos del llamado "cinturón de hierro" de Bilbao, que son las defensas que el Gobierno Vasco ordenó construir durante la guerra de 1936-1939, aunque apenas pudo ver la totalidad de la línea fortificada porque se lo impedía la niebla que cubría la zona; añadió que estuvo comiendo en la cima para esperar a que despejara la niebla, pero el tiempo no ayudaba, por lo que decidió marcharse, negando

que portara un gorro rojo. En cuanto a sus declaraciones durante la instrucción de la causa, negó las imputaciones que se le realizaban y dijo que llegó a denunciar haber padecido malos tratos y torturas por la Guardia Civil, en lo que se ratifica, habiendo sufrido amenazas cuando era trasladado con antifaz de Bilbao a Madrid, recibiendo asimismo un leve golpe en la cara. Ya en Madrid, lo desnudaron para el cacheo, le colocaron el antifaz y en el primer encuentro con la forense le intentó contar lo que le había ocurrido, pero ella le dijo que lo que tenía que denunciar lo hiciera ante el Juez. En calabozos le siguieron amenazando con hacerle daño o él y a su familia si no confesaba lo que querían que dijera, le dieron un fuerte bofetón y le dijeron que le iban a aplicar la bolsa, la bañera y los electrodos, recibiendo un golpe en los testículos, y siendo zarandeado e insultado, sufriendo un dolor de cabeza que duró todo el tiempo de la detención. En posteriores visitas de la forense, intentó contar lo que estaba ocurriendo, pero ella insistía que tenía que contárselo directamente al Juez, siendo en el Centro Penitenciario de Alicante donde el año pasado le hicieron las pruebas psicológicas en aplicación del llamado Protocolo de Estambul.

En relación a los aludidos malos tratos y torturas que dice el acusado que sufrió en los tres días que transcurrieron desde su detención hasta su puesta a disposición judicial, ninguna acreditación existe sobre las supuestas conductas irregulares atentatorias contra la integridad física y psíquica del acusado. Ya en la tarde del 10-6-2014 fue sometido a observación en la Clínica Médico-Forense de Bilbao (folios 1299 y 1300), donde negó que se le infligieran malos tratos físicos y/o psíquicos, refiriendo presión por la colocación de las esposas. Una vez en Madrid, fue visitado por la forense (folios 1261 a 1265) en la noche del 10-6-2014, así como en la tarde y la noche del 11-6-2014, y en la mañana y la tarde del 12-6-2014. En la primera de las cinco visitas de la forense, manifestó que no había sufrido violencia física ni lesiones, expresando cansancio por privación del sueño y permanencia en bipedestación; en la segunda visita, comentó a la forense que, desde la anterior visita, ha recibido violencia verbal y amenazas, así como algún golpe con la mano abierta en la región posterior de la cabeza, no evidenciándose ningún tipo de lesiones; en la tercera visita, acudió a instancia de los funcionarios que lo custodiaban, por manifestar el detenido que tenía una intensa cefalea, suministrándosele tratamiento farmacológico, sin relatar ningún

episodio violento desde la visita anterior; en la cuarta visita, se le evidencian marcas de presión en ambas muñecas y salvo éstas no refiere presentar lesiones; y en la quinta visita de la forense, ésta relata que, desde la última visita, no se evidencia ningún tipo de lesión en el detenido, no manifestando éste dolor a la palpación y refiere no presentar lesiones, diciéndole el informado que había recibido "algún" golpe.

Este cuadro médico es ratificado en el plenario por la forense Adolfina, quien añadió que el acusado es una persona hipertensa, que necesitó una pequeña dosis de antihipertensivo, haciéndose los reconocimientos médicos a puerta cerrada, sin presencia de nadie extraño a médico y paciente. Asimismo, manifestó que no constató ninguna lesión o marca de golpes, infligidos supuestamente por los funcionarios que custodiaban al acusado, limitándose a recoger en su informe global las referencias que el detenido le hacía sobre supuestas amenazas e injurias, sin mayor profundización al no resultar objetivables.

Particular valor hemos de dar a la pericial psicológica practicada con las Psicólogas Carmen y Esther, autora esta última del informe sobre aplicación al acusado de las técnicas recomendadas por el denominado Protocolo de Estambul, al objeto de averiguar si realmente sufrió malos tratos y torturas durante el período de su detención. Dicho informe, elaborado el día 7-4-2015 (es decir, diez meses después de la detención del acusado), figura incorporado a las actuaciones en los folios 228 a 257 del rollo de Sala. De él y de su correspondiente ratificación extraemos que la visita al penado cuando estaba internado en Fontcalent (Alicante) tuvo lugar el mes de marzo de 2015, detectando miedo y vulnerabilidad emocional en el informado, como consecuencia del estrés postraumático que presentaba, concluyendo que el testimonio sobre sus vivencias durante la detención es veraz.

Sobre la credibilidad que merece dicho informe de análisis de los datos derivados de la aplicación del Protocolo de Estambul al acusado, debemos tener presente que el Protocolo de Estambul, que se remonta al año 1999, se considera como una eficaz herramienta para investigar y documentar casos de posibles torturas. En el año 2000, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos adoptó tal

Protocolo como guía de referencia básica para la investigación y evaluación psicológica y psicosocial de posibles torturas, y encomendó a los Estados su uso para la erradicación de las mismas y establecer la concordancia o no existente entre los hallazgos clínicos detectados en la exploración del detenido y los alegatos de tortura que realice el sujeto explorado. Sin embargo, a pesar de que el Protocolo recomienda las visitas a los centros de detención y las entrevistas a los supuestos maltratadores o torturadores, los peritos intervinientes no lo hicieron, lo que resta credibilidad a su dictamen, recordemos que realizado casi un año después de producirse la detención del afectado. Por lo que tal informe se confeccionó teniendo sólo en cuenta el encuentro mantenido con el acusado, reiteramos que diez meses después de su detención. De ahí que las conclusiones del informe elaborado puedan confundirse con el estado psicossomático que presentaba el informado en situación de prisión preventiva desde largo tiempo.

Finalmente, en cuanto a las declaraciones del acusado Eugenio, en justificación de sus conductas de primeros de agosto de 2009 y mediados de 2010, tampoco nos merecen credibilidad, puesto que no han sido persistentes ni contundentes, al haberse expresado por primera vez en el acto del juicio, casi dos años después de acaecer los hechos que se le vienen atribuyendo. En anteriores oportunidades procesales, pudiendo hacerlo, no ha relatado ningún extremo de sus visitas a Castres y al monte Ganekogorta, a lo que desde luego tenía derecho. Pero también este Tribunal tiene la obligación de desentrañar las razones de su postrera e subjetiva versión exculpatoria, en la que no existe explicación verosímil acerca de la realización de un viaje tan largo a Francia para simplemente negar formar parte de la organización ETA, reuniéndose con uno de sus militantes sin necesidad de uso de señuelo o contraseña (el dato del periódico en la mano es introducido interesadamente por el acusado sin que se recoja en las actas de vigilancia y seguimiento elaboradas), no siendo tampoco lógica la estancia de dos días en las inmediaciones de Castres para negarse a colaborar, como tampoco que tenga hasta cuatro apelativos, según aparece en las agendas de dos de los más significados dirigentes de ETA y de un comando operativo. Asimismo incurre en contradicción, pues dijo que se vio con el militante de ETA en el Ayuntamiento, cuando del acta de vigilancia se extrae que el encuentro se produjo al salir de la Oficina

de Turismo, infiriéndose que conocía a su interlocutor, pues no medió entre ellos código o señuelo de identificación. Y por lo que se refiere a la visita al monte Ganekogorta, tampoco convence a este Tribunal la parcial versión del viaje para observar la línea del "cinturón de hierro" de Bilbao, pues se trataba, más bien o además, de una cita previamente concertada, como lo demuestra la marca o señuelo consistente en la colocación de una naranja encima de la mesa de orientación de la cima del monte, mientras el acusado se comía una manzana.

Circunstancia que no resulta incompatible con la declaración testifical de Herminio, también componente de la asociación memorialista "Galdakao Gogora" ("Galdácano recuerda"), dedicada al estudio y rescate de documentos y testimonios de épocas pasadas, incidiendo en el conocimiento del cinturón defensivo de Bilbao, de lo que son exponentes los documentos incorporados a los folios 417 a 425 y 429 del rollo de Sala.

B) Respecto a las declaraciones de los testigos-peritos, nos encontramos con la persistente y del todo coherente y creíble versión de los Guardias Civiles nº NUM005 y nº NUM006, especialistas de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, que elaboraron el Informe de Inteligencia nº 19/14, de 3-6-2014 (folios 729 bis a 973 de la causa), antecedente y determinante de las entradas y registros que llevaron a la detención del acusado. De forma lógica y sin fisuras manifestaron que al acusado lo 1 legaron a identificar con los alias de "Zurdo", "Farsante", "Raton" y "Bucanero" a través del estudio de las agendas incautadas al dirigente de ETA Constancio, alias "Pesetero" (agenda de la marca "Lecas" identificada por el sello CH/005), a Jose Manuel, alias "Gamba" (agenda identificada por el sello MAR/14) e Erica, Ezequias y Gumersindo (agendas de las marcas "Quo Vadis" y "Rodhia" identificadas por los sellos VW/73 y VW/67), donde aparecen dichas referencias, que relacionan de modo racional con la realización de un cursillo de adiestramiento que tendría lugar el 1 y 2 de agosto de 2009 en la localidad francesa de Castres (Departamento 81). Por tal motivo, se instaló en el lugar un dispositivo policial de vigilancia y seguimiento hispano-frances, que detectó la presencia del acusado Eugenio (al que conocían de su asistencia a manifestaciones de apoyo a los presos de ETA) en la mañana del día señalado, que llegó en su vehículo y contactó en la Oficina de Turismo con otro individuo (que resultó

ser un militante destacado de ETA, Nicolas, detenido poco tiempo después cuando accedía a un "zulo" donde había armamento de ETA), con el que se marchó del centro de la ciudad adoptando medidas de seguridad, no regresando el acusado al lugar donde había dejado su vehículo hasta el día siguiente a primeras horas de la tarde, en que regresó a su domicilio de Galdacano (Vizcaya). Resulta importante destacar que, para dichos expertos, en las citas orgánicas de ETA, si las personas que se van a encontrar son desconocidas, existe una contraseña establecida o señuelo previo, que en este caso no se produjo, por lo que debe por lógica deducirse que dichos individuos se conocían. En cuanto a la frustrada cita del día 2-5-2010, manifestaron que lo más llamativo es la contraseña consistente en la colocación de una naranja en la mesa de orientación de la cima del monte Ganekogorta durante 15 minutos, a cuyo transcurso el acusado se marchó del lugar; todo lo contrario a lo acontecido en Castres, donde no medió señuelo alguno, a pesar del interesado y extemporáneo intento del acusado por querer hacer ver a este Tribunal que dicho señuelo consistía en portar un periódico, sin más especificaciones, lo que desde luego no aparece constatado en autos.

Por otro lado, también fueron oídos en declaración los testigos-peritos Guardias Civiles nº NUM007 y nº NUM008, Especialistas en Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya, que emitieron el Informe de Imputaciones elaborado con motivo de la detención del acusado (folios 1711 a 1765 de la causa), los cuales se ratificaron en el mismo, actuando el primero como instructor de las diligencias y el segundo como secretario, añadiendo que el trato al detenido fue siempre correcto, no presenciando ni teniendo conocimiento que alguien amenazase o golpease al acusado, quien iba siendo visto por el médico forense, al punto que en cierta ocasión ellos tomaron la iniciativa de que fuera examinado porque refería el detenido que tenía cefaleas. A continuación hacen alusión a los nexos de unión del detenido con otros militantes de ETA, lo que se averiguó a través de la documentación incautada en diversas detenciones practicadas en Francia, apareciendo en dichas agendas bajo cuatro alias diferentes pero íntimamente relacionados, deduciéndose de tales análisis que lo citaron para realizar un cursillo, porque la estancia no fue breve sino que duró dos días. Terminan indicando que no es normal que alguien se desplace a Francia para

materializar una cita y simplemente lo haga para decir que no a ETA, puesto que ETA capta a gente que quiere participar. Inferencia que comparte plenamente este Tribunal.

Finalmente, ante las reticencias que opuso la defensa del acusado sobre la viabilidad procesal de tales periciales de inteligencia policial, conviene no terminar este apartado sin manifestar que sobre la naturaleza jurídica de dicha prueba, establecen las S.T.S. nº 352/09, de 31-3-2009, y nº 50/07, de 19-1-2007, que la utilización de los informes policiales de inteligencia en los supuestos de delincuencia organizada es cada vez más frecuente y está reconocida en nuestro sistema penal pues, en definitiva, no es más que una variante de la pericial a que se refieren tanto el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya finalidad no es otra que la de suministrar al órgano judicial una serie de conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos para fijar una realidad no constatable directamente por el Juzgador y que, obviamente, no es vinculante para él sino que, como el resto de probanzas, quedan sometidas a la valoración crítica, debidamente fundada en los términos del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Añaden dichas resoluciones que la prueba pericial es una prueba personal, pues el medio de prueba se integra por la opinión o dictamen de una persona, y al mismo tiempo es una prueba indirecta, en tanto proporciona conocimientos técnicos para valorar los hechos controvertidos, pero no un conocimiento directo sobre cómo ocurrieron los hechos. Este tipo de prueba, se caracteriza por las siguientes notas: a) Se trata de una prueba singular que se utiliza en algunos procesos complejos, en donde son necesarios especiales conocimientos, que no responden a los parámetros habituales de las pruebas periciales irás convencionales b) En consecuencia, no responden a un patrón diseñado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no obstante lo cual nada impide su utilización en el proceso penal cuando se precisan esos conocimientos, c) Aun cuando se trata de una prueba que participa de la naturaleza de pericial y testifical, es, desde luego, más próxima a la pericial, pues los autores del mismo aportan conocimientos propios y especializados, para la valoración de determinados documentos o estrategias. Y d) En todo caso, la apreciación de tales informes es libre, de modo que el Tribunal de instancia puede analizarlos racional y libremente, pues aún ratificados por sus autores no resultan en ningún caso vinculantes para el Tribunal sino que, como el

resto de las pruebas, quedan sometidas a la valoración crítica, debidamente fundada en los términos del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el supuesto examinado, este Tribunal entiende que la prueba practicada en las personas de los cuatro miembros de la Guardia Civil nombrados, no tiene del todo la consideración de prueba testifical, sino que también constituye prueba pericial, al menos en los extremos referidos a la exposición de sus conocimientos sobre la organización terrorista ETA, basados en su dilatada experiencia profesional dedicada a indagar sobre aquel sector de la criminalidad organizada de tanta incidencia en la vida e integridad de tantas personas víctimas de las reprobables acciones perpetradas por ETA.

De ahí que se les haya tomado declaración en su doble condición de testigos y peritos, sin perjuicio de las facultades de libre valoración que este Tribunal ostenta sobre tales declaraciones, de conformidad con lo establecido en el tan nombrado artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Resulta necesario, además, recordar que tal doble condición está expresamente permitida en el artículo 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación subsidiaria en el proceso penal en virtud de la cláusula de remisión prevista en el artículo 4 de dicha Ley Procesal Civil.

C) En cuanto a la prueba más propiamente testifical practicada en las personas de los funcionarios investigadores de los hechos por los que se atribuye responsabilidad criminal al acusado, al plenario acudieron los Guardias Civiles nº NUM009 y nº NUM010, que intervinieron en la vigilancia y seguimiento al acusado durante los días 1 y 2-8-2009 en Castres (Francia). El acta de vigilancia, emitida el 2-6-2014 pero elaborada en la fecha de la actuación policial, obra en los folios 834 a 840 de la causa. De ella extraemos que:

"El sábado día 1 de agosto de 2009, siguiendo instrucciones de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, establecieron dispositivo de vigilancia y control policial en la ciudad francesa de CASTRES (81), todo ello al objeto de comprobar si en la citada ciudad se producía un encuentro entre individuos integrados en la Organización

terrorista ETA; sobre las 08:00 horas se estableció el dispositivo policial sobre los accesos a la ciudad y zona centro de la misma; sobre las 09:00 horas el dispositivo de vigilancia observa como un vehículo con placas de matriculas españolas estaciona en la Place L'Albinque de la ciudad de CASTRES (81), este vehículo de la marca Peugeot 307 de color gris cuenta con la placa de matrícula PHP siendo propiedad de Eugenio; el individuo que estaciona el vehículo se dirige posteriormente hacia la oficina de turismo situada en la Place de la Republique de Castres donde entra; sobre las 09:39 horas el citado individuo sale de la oficina de turismo, en este momento el dispositivo policial recibe la confirmación que tras el cotejo realizado por bases del DNI, la persona que conduce el citado vehículo es reconocida como su propietario Eugenio; tras salir de la oficina de turismo se une a un individuo desconocido, caminando ambos con dirección a la Place L'Albinque de la ciudad de Castres (81), lugar donde se encuentra estacionado el vehículo Peugeot 301 de color gris con la placa de matrícula PHP; una vez que ambos individuos llegan al aparcamiento anteriormente citado montan en el vehículo Peugeot 307 de color gris con la placa de matrícula PHP; seguidamente inician la marcha circulando el vehículo con los dos individuos en su interior por la Rué Croix de Fournes y Rue Roucayrol de la ciudad de Castres (81); sobre las 10:18 horas, el vehículo estaciona en la última calle anteriormente mencionada, bajándose los dos individuos, los cuales a pie caminan por distintas calles del centro de la ciudad; sobre las 10:31 horas el dispositivo policial establecido, y ante las numerosas medidas de seguridad adoptadas por los dos individuos, se pierde el control sobre ellos; tras las correspondientes búsquedas realizadas, sin conseguir retomar el control sobre los individuos, el dispositivo policial se centra en la vigilancia del vehículo Peugeot 307 de color gris con la placa de matrícula PHP, el cual se encuentra estacionado en la Rué Roucayrol de la ciudad de Castres (81), sin nadie en su interior; el dispositivo de vigilancia se prolonga durante todo el día y toda la noche del sábado día 1 de agosto de 2009, sin que nadie se acerque al referido vehículo".

"El domingo día 2 de agosto de 2009, se establece vigilancia policial sobre el vehículo Peugeot 307 de color gris con la placa de matrícula PHP, propiedad de Eugenio, el cual se encuentra estacionado en la Rue Roucayrol de la ciudad francesa de Castres (81), como continuación al dispositivo policial de vigilancia establecido en el

día anterior (sábado día 1 de agosto de 2009); sobre las 12:25 horas se observa como Eugenio se aproxima a su vehículo el cual se encuentra estacionado en la calle de la ciudad de Castres (81) anteriormente mencionada; sobre las 12:30 horas el vehículo inicia la marcha circulando por la Rué Roucayrol y Rué Charles Counod de la ciudad de Castres (81), conducido por Eugenio, como único ocupante; tras abandonar la ciudad de Castres (81) el vehículo circula por el itinerario lógico hasta llegar a la frontera entre Francia y España, la cual rebasa por el paso fronterizo de Behobia (Irán); una vez ya el interior de España el vehículo conducido por Eugenio, como único ocupante del vehículo, circula por la autopista AP-8 con dirección a la localidad de Galdácano (Vizcaya); sobre las 18:15 horas aproximadamente el vehículo estaciona en la CALLE000 de la localidad de Galdácano (Vizcaya); una vez el vehículo estacionado, se observa a Eugenio cómo entra en el portal número tres (NUM002) de la CALLE000".

Los dos testigos nombrados se ratificaron en el acta de vigilancia mencionada, añadiendo de modo contundente que el encuentro del acusado con su interlocutor se produjo cuando el acusado salió de la Oficina de Turismo y en unas condiciones como si ya se conocieran, pues no medió contraseña ni identificación recíproca. Añadieron que las medidas de seguridad adoptadas en Castres por ambos vigilados se traducen en contramarchas, cambios bruscos de velocidad al caminar, paradas repentinas, caminar uno detrás del otro y utilización de calles no frecuentadas.

Por otro lado, también comparecieron en el juicio los Guardias Civiles nº NUM011 y NUM012, que participaron en la vigilancia y seguimiento del acusado en el monte Ganekogorta (Vizcaya) el día 2-5-2010, habiendo suscrito el acta de fecha 2-6-2014, obrante en los folios 849 y 850 de la causa. Del acta de vigilancia extraemos lo siguiente:

"El domingo día 2 de mayo de 2010, en el marco de las investigaciones realizadas sobre Eugenio para esclarecer su presunta vinculación con la organización terrorista ETA, se procedió a establecer un dispositivo de vigilancia policial; sobre las 07:50 horas del referido día, Eugenio salió de su casa, ubicada en el nº NUM002 de la CALLE000 de la localidad de Galdacano (Vizcaya; tras salir de su domicilio, monta en

su vehículo particular, el Peugeot 301 da color gris con matrícula PHP, y circula como único ocupante hasta la localidad de Zollo (Vizcaya); tras estacionar el vehículo en la localidad de Zollo (Vizcaya), se apea del mismo y comienza la ascensión por su cara sur al monte Ganekogorta (Vizcaya); sobre las 10:45 horas se observa como Eugenio llega a la cima del monte Ganekogorta (Vizcaya), donde permanece en actitud de espera; a las 11:00 horas en punto Eugenio se acerca al punto geodésico del monte Ganekogorta (Vizcaya), cima del referido monte, donde se encuentra ubicada una mesa de orientación; durante aproximadamente 15 minutos, permanece sentado junto a la mesa de orientación, habiendo colocado sobre la misma una naranja mientras se come una manzana; pasados esos 15 minutos, y sin haber contactado con persona alguna en la cima del monte, comienza el descenso por la misma ruta por la cual realizó el ascenso, hasta llegar a la localidad de Zollo (Vizcaya); una vez que llega a la localidad de Zollo (Vizcaya), sobre las 12:35 horas aproximadamente, monta de nuevo en su vehículo e inicia la marcha con dirección a la localidad de Galdácano (Vizcaya); sobre la 14:00 horas, el vehículo estaciona en la CALLE000 de la localidad de Galdácano (Vizcaya), y Eugenio entra en su domicilio".

Ambos testigos declararon en el plenario que ratifican el acta que suscribieron, añadiendo sin fisuras el primero que la actitud del acusado dejando una naranja sobre la mesa y comiéndose una manzana les resultó extraña y coincide con el método o protocolo seguido en muchas citas de ETA, constituyendo una contraseña para que su interlocutor conociera que el acusado estaba en el lugar concertado y era la persona con la que debía reunirse, lo que al final no ocurrió, por circunstancias que se desconocen.

Finalmente, el testigo Nicolas, que fue visto con el acusado en la localidad francesa de Castres en la mañana del día 1-8-200 9, declaró por videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha (Ciudad Real), donde está interno, que fue detenido en Francia en la proximidad de un "zulo", habiendo sido condenado por asociación de malhechores. Admitió que estuvo con el acusado en Castres un día porque le quería proponer que les ayudara, respondiendo Eugenio que no quería ayudar y que tenía trabajo, mujer e hijos, por lo que no estaba dispuesto a acceder al

ofrecimiento, no dando tiempo al dicente para hacerle ninguna propuesta concreta. Le llevó a las afueras del pueblo, pero tampoco le convenció, como igualmente ocurrió cuando le llevó por una cisca forestal a un lugar donde había una tienda de campaña, donde el acusado durmió. Al día siguiente dice que le vino a recoger y le llevó de nuevo al pueblo. Terminó indicando que tenían una contraseña para localizarse, y por dicha contraseña lo reconoció, no recordando dicha contraseña.

Esto último resulta sorprendente e inverosímil, especialmente cuando los Guardias Civiles que estaban al tanto de sus movimientos no se apercibieron de que hubiera entre ellos una consigna o señuelo de identificación. Como igualmente ilógico es el dato atinente a la ausencia de explicación racional sobre las circunstancias que determinaron que el acusado permaneciera dos días en un lugar desconocido y entre personas desconocidas, según la versión del mismo, que no ha venido a aclarar o complementar el testigo, sino en todo caso a ratificar aquella increíble e interesada versión. De ahí que no la creamos.

E) Y como pruebas documentales, son de destacar las fotografías que se acompañan al acta de vigilancia de los días 1 y 2-8- 2009, donde aparecen el acusado y la persona con la que se reunió en Castres, Nicolas. Tales fotogramas se corresponden con los momentos previos a adoptar las medidas de seguridad que determinaron que los funcionarios actuantes aplicaran un método de seguimiento más flexible, lo que permitió que ambos vigilados dejaran de ser vistos, no apareciendo en escena el acusado sino al día siguiente, en horas del mediodía.

TERCERO.- Pronunciamiento absolutorio sobre los hechos atribuidos al acusado relacionados con una supuesta conspiración para cometer dos asesinatos terroristas.

A) Con arreglo a los hechos declarados probados en los apartado tercero de la narración táctica de esta sentencia, no podemos pronunciar contra el acusado Eugenio una resolución condenatoria por la perpetración de un delito de conspiración para cometer dos asesinatos terroristas, pues no se ha probado la comisión de dichos actos punibles, previstos en los artículos 17.1 y 3 y 139.1, en relación con los artículos 573 y

573.1° bis del Código Penal en su redacción actual, y en los artículos 17.1 y 3 y 139.1 en relación con el artículo 572.2.1ª del Código Penal, en su redacción vigente en el momento de comisión de los hechos.

Sobre este incipiente grado de ejecución del delito, indica la S.T.S. nº 1994/02, de 29-11-2002, que los artículos 17 y 18 del Código Penal contemplan lo que doctrinalmente se ha venido llamando resoluciones manifestadas, que tienen en común con los actos preparatorios el quedar fuera de la ejecución o materialización del delito, en tanto en cuanto no afectan al núcleo del tipo, ya que el sujeto realiza una manifestación de voluntad, cuya naturaleza inmaterial les distingue de los auténticos actos preparatorios. Tanto respecto a los actos preparatorios, como a las resoluciones manifestadas, rige la norma general de la no punición. Sólo excepcionalmente se castigarían estas últimas cuando de forma expresa lo prevea la ley. En la conspiración y provocación, los términos de la ley parece que no originan dudas respecto a la intervención asignada a los conspiradores y provocadores: La conspiración existe, según la ley, "cuando dos o más personas se concierten para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo" (artículo 17.1 del Código Penal); nos hallamos, pues, ante la denominada "coautoría anticipada", en la que se prevé la intervención de todos los conspiradores en la realización material del hecho delictivo, sea cual fuere el cometido o la parte del plan acordado que les haya tocado ejecutar a cada uno de los concertados. La provocación, por su parte, "existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración del delito" (artículo 18.1 del Código Penal); es obvio que en este caso, referido a una incitación intensa, de indudable amplitud y fuerza difusora, el provocador no pretende cometer el hecho delictivo, quedando al margen del mismo, en la esperanza de que el mensaje lanzado, pueda ser asumido por alguno de los indeterminados destinatarios. Por último, "la proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él" (artículo 17.2 del Código Penal); realmente se trata de una "inducción frustrada" o "tentativa de inducción" y en los términos en que la describe la ley, no resulta claro afirmar si tiene o no que participar personalmente en el hecho

proyectado el que realiza la propuesta, o por el contrario ésta debe realizarla materialmente el instigado o requerido sin necesidad de intervenir el proponente.

Sostiene la S.T.S. nº 1129/02, de 18-6-2002, que el delito de conspiración, siguiendo una línea jurisprudencial poco discutida, tiene los siguientes componentes: 1º.- Se trata de un delito de características híbridas, pues si bien se le ha considerado en muchas ocasiones como un delito de "dinámica propia". no es fácil olvidar que, al mismo tiempo y de una forma indefectible es subsidiario o "dependiente" de otro que podemos llamar "principal", o lo que es lo mismo, podríamos decir que se trata de un delito simplemente "mediato" y no "inmediato". 2º.- Por tanto, la independencia tipológica de estos delitos es más aparente que real porque, de un lado, el artículo 17.1 del Código Penal nos indica que la conspiración siempre habrá de ir dirigida a la "ejecución de un delito" y, de otro, porque el módulo cuantitativo de la pena que pueda corresponder se hace depender de la que haya de aplicarse al delito pretendido (delito "matriz"). 3º.- Es necesario que este delito de pura intención no se haya iniciado en su ejecución, pues (obvio es decirlo) de así ocurrir entraríamos en el campo de la tentativa, figura jurídica distinta a la de la conspiración, de ahí que en múltiples ocasiones sea muy difícil de diferenciar este tipo delictivo de las formas imperfectas de ejecución. 4º.- Se requiere el concierto de dos o más personas para la ejecución delictiva de que se trate y que todas ellas tengan el ánimo de llevar a cabo esta coautoría anticipada que Tía de inferirse de "condicionamientos eminentemente psicológicos para su vivencia" cuales son, no sólo el carácter previo o "pactum scaeleris" entre esas formas, sino también la decisión de su efectividad o "resolutio finis". En definitiva, como expresa la S.T.S. de 12-7-2004, por concepto la conspiración exige una variedad (dos o más) de personas y además de concertarse para ejecutar el delito, es preciso que se sepa que lo hacía insertándose en una estructura criminal pluripersonal.

En el supuesto enjuiciado, no se ha probado que el acusado se haya puesto de acuerdo con otras indeterminadas personas -que no se nombran en el escrito de conclusiones de la acusación- para ejecutar un acto atentatorio de la vida del Lehendakari Carlos Miguel y el Consejero de Interior del Gobierno Vasco Juan Pedro, supuestamente previsto para el día en que se cumplía el primer aniversario de la

muerte por ETA, mediante la utilización de una bomba-lapa adosada a los bajos del vehículo oficial que utilizaba, del Inspector de Policía Juan Ramón, perpetrada el día 19-6-2009 en el barrio de La Peña de Bilbao.

A pesar de la abundancia de la prueba practicada, de ella no pueden extraerse las consecuencias punibles propuestas por la acusación personada, por no constituir en su conjunto verdadera y contundente prueba de cargo que enerve la presunción de inocencia del acusado.

En los próximos subapartados analizaremos dichos medios probatorios, cuyos débiles resultados nos lleva a dictar sentencia absolutoria del acusado en relación con estos concretos hechos. Como podremos comprobar, ni se ha constatado el concierto previo con otras personas, ni existe acreditación sobre el modo de ejecución de los proyectados asesinatos, ni siquiera se ha dispuesto de medios idóneos para la eventual ejecución delictiva. Aparte de ello, la notitia criminis originada por las declaraciones de otros dos militantes de ETA a los que luego haremos mención, presentan quiebras insalvables.

B) El acusado Eugenio, tanto en sus declaraciones en el plenario como durante la instrucción de la causa, ha venido manifestando que, no sólo negaba su pertenencia a ETA, sino que también negó que tuviera relación con la concertación delictiva investigada, encaminada a producir la muerte, no sólo del Lehendakari Sr. Carlos Miguel, sino también del Consejero de Interior Sr. Juan Pedro. El examen comparativo de su declaración y la prueba existente acerca de las cualidades personales que permitían mantener que el acusado se insertaba en el plan criminal ideado por ETA, arrojan resultados nada favorables para las tesis de la acusación.

Contestando específicamente a las preguntas de su Abogada, el acusado manifestó en el juicio que el servicio militar obligatorio lo realizó en la División de Infantería de Marina de Cádiz, siendo destinado a la Sección de Deportes, realizando las habituales prácticas de tiro, pero no realizando ningún curso de francotirador ni ninguno de adiestramiento de tiro con mira telescópica, habiendo comenzado el servicio militar

como soldado de segunda y terminándolo con la misma categoría. Sobre su alta en la Federación de Tiro Olímpico de Vizcaya en enero de 1988, dijo que fue un hecho puntual, derivado de la realización, tras su salida del Ejército, de un curso como vigilante jurado organizado por el Instituto Vasco de Nuevas Carreras, siendo federado para tener cobertura aseguradora mientras hacían las prácticas de tiro, que fueron muy básicas y duraron dos días. Negó que haya participado en competiciones de tiro en el año 1988, a pesar de que en el registro de su domicilio se encontrara un calendario correspondiente a dicho año. Admitió que tenía licencia de armas desde 2004, pero sólo para usar escopetas de caza como las tres que se le incautaron, que están legalizadas y completamente en regla para practicar la caza menor con perro de muestra; y por eso tiene la licencia de armas tipo E, que es la que habilita para el ejercicio de esa modalidad de caza, habiendo realizado un examen teórico tipo test para su obtención. Precisamente, la mira telescópica de la marca Norica que se le intervino es de una escopeta de aire comprimido regalada por su madre a principios de los años 30, cuando era menor de edad. Finalmente, niega que se le pueda considerar un tirador selecto, no habiendo realizado practicas de tire a una distancia de 300 metros, añadiendo que tiene 181 centímetros de estatura.

En relación a la visita que en determinado momento hizo al parque Larreagaburu de Bilbao, a preguntas sólo de su defensa reconoció que estuvo allí el 17-12-2009, pero por un asunto vinculado a su trabajo como perito de una compañía de seguros, pues hubo un parte de siniestro sobre un dudoso robo de un aparato de música instalado en un vehículo y quiso comprobar si existían evidencias de la sustracción del equipo musical por rotura de una ventanilla en el aparcamiento de la zona, teniendo dificultades para llegar al lugar porque no sabía cómo acceder a él.

C) En cuanto a la prueba testifical practicada, para una mejor comprensión la sistematizaremos en varios compartimentos, comenzando con las declaraciones efectuadas por los militantes de ETA Eleuterio y Asunción (integrantes del comando "Otazua" y partícipes del asesinato terrorista del inspector Sr. Juan Ramón). Es en estas declaraciones en las que el Ministerio Fiscal pone el acento para fundamentar su pretensión de condena por conspiración del acusado Eugenio.

a) Para llegar a la conclusión de que de tales declaraciones, así como de ninguna otra prueba practicada, podemos obtener las consecuencias condenatorias interesadas, debemos comenzar por recordar el tenor literal de aquellas declaraciones de los mencionados militantes de ETA.

- En relación a Eleuterio, en los folios 11 y 12 de su segunda declaración ante la Guardia Civil, en las dependencias de la Jefatura de Información de la Dirección General de la Guardia Civil, tomada el 4-3-2011 de las 22:53 horas hasta las 3:40 horas del día siguiente (folios 853 a 866 de la causa), después de ser preguntado si había mantenido citas con "Zanagollas" (Octavio: dirigente del aparato militar de ETA después de la detención de "Pesetero"), hizo referencia a lo siguiente:

"...En diversas ocasiones hablaron del posible atentado en Madrid. Que le pasaron toda la información recabada de las torres KIO a Zanagollas, quien fijó fecha para facilitarles los vehículos que utilizarían para cometer el atentado, una furgoneta y un coche, no pudiéndose llevar a efecto la entrega de los vehículos al ser interceptada la furgoneta cerca de Portugal por la Policía o la Guardia Civil.

En otra de las citas, Zanagollas le comenta la posible acción contra el Lehendakari Carlos Miguel y Consejero de Interior del Gobierno Vasco Juan Pedro. Esta acción pensaban realizarla mediante un fusil con mira telescópica, para lo cual les facilitó una cita en el monte Ganecogorta con la persona que supuestamente iba a realizar el disparo, que era cazador y participante en concursos de tiro.

A esta cita acudieron los tres, accediendo a la cima del monte solamente Rana (Oscar), permaneciendo el dicente y María Rosa (Asunción) en una zona más baja situada en el monte Pagasarri.

Que al desconocer los tres la identidad de la persona elegida para realizar el disparo, se acordó que ésta debía acudir con una vestimenta determinada pero que finalmente no acudió a la cita.

Esta acción tenía previsto realizarse en el barrio de La Peña, coincidiendo con el aniversario de la muerte del Policía Juan Ramón".

- En relación con Asunción, en los folios 2 y 3 de su segunda declaración ante la Guardia Civil, en las dependencias de la Jefatura de Información de la Dirección General de la Guardia Civil, tomada el 5-3-2011 desde las 5:45 horas hasta las 6:40 horas (folios 867 a 871 de la causa), alude a una cita que ella y Joaquín (Oscar) tuvieron con "Zanagollas" (Octavio: reiteramos que dirigente del aparato militar de ETA después de la detención de "Pesetero") el día 14-2-2010 en París, diciendo lo siguiente:

"...Cuando se encontraron con Zanagollas se dirigieron a un hotel previamente concertado por éste, donde pasaron dos noches en las cuales les impartió un cursillo de informática, asegurándoles Zanagollas que la furgoneta interceptada en Portugal era efectivamente la destinada a las torres KIO, En esa misma cita les dio dos tarjetas de memoria, conteniendo una de ellas el programa LINUX y la segunda con dos citas que debían mantener.

La primera de ellas era con un señor de unos cuarenta y cinco años, bajito, gordo y con cabeza grande. Éste había sido en el servicio militar tirador selecto. El objetivo de la reunión con esta persona era comentarle que con ocasión del homenaje al policía de la Peña, efectuasen un disparo sobre una personalidad que acudiese al acto, concretamente contra Carlos Miguel.

El día de esta primera cita era el primer domingo de marzo, en el monte Ganekogorta, a donde debían acudir con un gorro rojo y una pieza de fruta en la mano, sentándose en la cima del monte. A dicho lugar subió Joaquín, mientras Tuercebotas (Eleuterio) y la dicente permanecían abajo realizando contravigilancias. La cita estaba programada para las once horas, pero al no aparecer el hombre con el que debían mantener contacto a las once quince horas, Joaquín se marchó del lugar, volviendo de nuevo al mismo una hora después, a las doce.

Como a ese segundo contacto tampoco acudió la otra parte, Joaquín comenzó el descenso, reuniéndose con la dicen te y su pareja, cerca del refugio en el inicio de la subida al Ganekogorta. Desde allí bajaron el monte regresando cada uno a su domicilio.

La segunda cita que debían mantener con este hombre era el domingo siguiente, pero en ese intervalo recibieron una nota de la organización en la que se les indicaba que debían parar su actividad, motivo por el cual no acudieron a la cita".

b) Los testigos Eleuterio y Asunción, que según la Guardia Civil implican al acusado en los hechos por los que ahora es absuelto, declararon por videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Jaén, donde cumplen condenas por su actividad terrorista. Ambos se retractaron de las manifestaciones que efectuaron ante la Guardia Civil, pues como han declarado en los diferentes juicios en los que han sido juzgados por los graves atentados que cometieron, sostienen que tales declaraciones se hicieron bajo tortura, ratificándose en las denuncias que han formulado posteriormente Eleuterio indicó que también ante el Magistrado Juez Central de Instrucción se ratificó en sus declaraciones -entre ellas las que se han extractado, por concernir a este enjuiciamiento-, pero a los diez días se desdijo en una nueva declaración judicial; preguntado acerca de por qué no comentó nada al médico forense sobre los malos tratos que dice haber recibido, contestó que no lo hizo por miedo a represalias, ya que la puerta del lugar donde era asistido se encontraba entreabierta y fuera estaban los Guardias Civiles. Por su parte, Asunción manifestó en el plenario que no era cierto nada de lo que dijo a la Guardia Civil, cuya negativa ratificó ante el Magistrado Instructor, habiendo interpuesto denuncia por torturas, que fue archivada, pero que el Tribunal de Estrasburgo ha fallado a su favor, habiendo relatado al forense e trato denigrante que recibió en los días que estuvo detenida, aunque no contó más también por miedo a las represalias, porque la puerta de la habitación donde era atendida quedaba abierta. Ambos testigos dijeron que no tenían noticia de que estuvieran imputados en este procedimiento, como desde luego ocurre.

c) La tesis de ambos testigos, reforzada por la posición de la defensa del acusado, acerca de la realidad de los malos tratos recibidos por aquellos en el tiempo que estuvieron detenidos antes de pasar a disposición judicial, no se ha visto confirmada en ninguna de las cuatro sentencias que constan en las actuaciones, en las que han sido condenados por la producción de graves delitos contra la vida y la integridad de las personas.

A este juicio acudió el médico forense Luis Pablo, que atendió a ambos testigos durante los días que permanecieron detenidos en las Diligencias Previas nº 41/11 del Juzgado Central de Instrucción nº 3, luego transformadas en el Sumario nº 52/11. En el plenario, dicho forense describió el estado de ambos detenidos y sus comentarios en el período del 1 al 5-3-2011. De las declaraciones del mencionado forense y de los informes que elaboró, los cuales aparecen en los folios 230, 268, 269, 327, 328, 431, 432 y 829 (respecto a Eleuterio) y en los folios 231, 265, 329, 330, 433 y 434 (respecto a Asunción) del aludido Sumario nº 52/11, procedimiento que está contenido en el CD unido al folio 1645 de la causa, extraemos los siguientes datos:

- En cuanto a Eleuterio, siempre manifestó al forense, en las nueve ocasiones en que lo visitó a puerta cerrada, que recibía un trato correcto y no había sufrido maltrato físico ni psíquico, sin querer ser reconocido salvo cuando ya estaba en la Audiencia Nacional, donde quiso que se le tomara la tensión, preguntando por su novia Asunción en las dos últimas visitas del facultativo.

- En cuanto a Asunción: El día 1-3-2011 por la noche manifestó al médico forense que había sido detenida sobre las 04:00 horas de ese día en su domicilio de forma violenta y que no había sufrido maltrato físico, pero durante la conducción le dijeron que iban a hacer daño a su familia y la manosearon, manifestando no querer ser reconocida; se recoge en el informe médico que presentaba en la cara externa del brazo un área redondeada de unos 6x4 cms. de coloración rojiza, que, según la acusada, respondía a que le habían sujetado los brazos en la detención y durante el registro; en lado radial de ambas muñecas presentaba una marca eritematosa por colocación de esposas y una cicatriz antigua; se la observa normocoloreada, estaba

consciente, orientada en tiempo y espacio, lenguaje y discurso coherente y porte tranquilo. El día 2-3-2011, a las 10:10 horas, la detenida manifestó que tenía malestar en la garganta, que no había querido desayunar ni cenar, y que había dormido a ratos por la situación, ya que estaba preocupada; que había sufrido maltrato físico, que le intentaron introducir un palo de escoba por la vagina, sin llegar a la penetración, que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, que no llegó a perder el conocimiento y le echaron agua por el cuerpo para aplicarle electrodos, pero que no lo hicieron; manifestó que quería ser reconocida, presentando irritación de faringe izquierda, las áreas rojizas en brazos presentan una coloración más tenue, saburrea lingual, sequedad labial, sin que se descubriera partes íntimas ni extremidades inferiores, estando consciente, orientada en tiempo y espacio, lenguaje y discurso coherentes y porte tranquilo, sin querer medicación alguna para la irritación faríngea. El mismo día 2, pero a las 19:20 horas, la detenida manifestó que continuaba con molestias en la garganta, no queriendo tomar medicación, sin que hubiera sufrido maltrato físico y no queriendo ser reconocida; se la observó normocoloreada, sequedad labial, estando consciente, orientada en tiempo y espacio, lenguaje y discurso coherente y porte tranquilo. El día 3-3-2011, a las 09:50 horas, la detenida manifestó que estaba mareada, que había dormido a ratos, que no quiso cenar ni desayunar, que no había sufrido malos tratos y que no quería ser reconocida, salvo la tensión arterial; se la observó normocoloreada, sequedad labial, TA 100/60, no arritmias, estando consciente, orientada en tiempo y espacio, lenguaje y discurso coherente y porte tranquilo. El mismo día 3, pero a las 19:05 horas, la detenida manifestó que en la mañana de ese día le habían amenazado en relación a su familia cuando le habían interrogado, y que no quería ser reconocida, con las mismas observaciones que en la visita médica anterior. El día 4-3-2011, a las 9:50 horas, refirió que estaba bien, que había dormido, que había cenado un sandwich mixto y que había bebido agua, no queriendo desayunar; no quiso ser reconocida y manifestó que no había sufrido maltrato físico ni psíquico, siendo el resto de las observaciones como las anteriores. Y el mismo día 4, pero a las 19:05 horas, refirió estar bien, haber tomado un poco de tortilla de patatas y haber bebido agua, así como que hacía un rato le habían propinado una colleja, no queriendo ser reconocida y las observaciones, de idéntico tenor que las reseñadas en el reconocimiento médico anterior.

Con estas apreciaciones, extraídas de los informes médicos que el forense iba elaborando con ocasión de sus risitas a ambos detenidos, resulta ausente cualquier dato que lleve a la conclusión de que se les infligiera malos tratos y torturas di; rante el a cupe que media entre sus detenciones y la puesta a disposición judicial, no objetivándose patologías compatibles con tales malos tratos no constatados. En el mismo sentido de negación de cualquier maltrato se manifestó el testigo Guardia Civil nº NUM013, responsable de la custodia de los detenidos, que les leyó sus derechos constitucionales y actuó como instructor de sus declaraciones policiales, las cuales calificó de espontáneas, y no de forzadas o sugeridas.

No se nos pasa por alto que dichos testigos formularon sendas denuncias por malos tratos y torturas: Eleuterio el 19-5-2011 aunque fechada el 27-4-2011), que dio lugar a las Diligencias Previas nº 1572/11 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Bilbao (folios 646 a 659 del rollo de Sala), y Asunción el 18-3-2011 (aunque fechada el 15-3-2011), que dio lugar a las Diligencias Previas nº 864/11 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbao (folios 660 a 674 del rollo de Sala), Ambas denuncias dieron lugar a dos procedimientos penales que han terminado con autos de sobreseimiento provisional, al no quedar debidamente determinada la perpetración de los hechos de las denuncias. En el caso de Asunción, el procedimiento penal fue sobreseído el 26-5-2011 en el Juzgado, siendo confirmada dicha decisión en apelación por la Audiencia Provincial de Bilbao el 28-9-2011.

Asimismo, consta en autos que la denuncia de Asunción ha llegado a las instancias europeas, por cuanto su aso ha sido objeto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7-10-2014 (folios 675 a 683 vto. del rollo de Sala). Sin embargo, en momento alguno se declara que realmente la nombrada haya sido objeto de malos tratos y torturas, sino que se admite a trámite el recurso interpuesto, bajo el argumento de que no se llevó en su momento una investigación previa exhaustiva de su caso.

Por otro lado, a Asunción se le practicó en la Centro Penitenciario de Córdoba, donde se hallaba interna, las pruebas psicológicas del denominado Protocolo de

Estambul. El informe con las conclusiones, de fecha 2-11-2012, obra en los folios 208 a 227 del rollo de Sala, y ha sido ratificado en el plenario por las Psicólogas Carmen y Esther, que manifestaron haber detectado en la informada un cuadro de ansiedad importante, padeciendo estrés postraumático, síntomas depresivos y disociativos, al haber vivido una experiencia traumática. A la primera perito no le parece congruente el estado de la informada que aparece en las pruebas que se realizó con la observación de "porte tranquilo" que reiteradamente le apreció el forense. De cualquier forma, ya hemos explicado cuando tratamos del informe de la misma naturaleza realizado al aquí acusado, también realizado con mucha posterioridad a su detención (10 meses en el caso del acusado y 20 meses en el caso de la testigo que nos ocupa), las reticencias que le ponemos a tales informes basados en el Protocolo de Estambul. Y ello porque las directrices que aconseja llevar a efecto no se cumplen del todo, por lo que necesariamente sus resultados no pueden ser considerados determinantes de la existencia de violencia física y psíquica ejercitada sobre la detenida de la que tratamos.

Hemos de destacar que para la elaboración de los oportunos informes, el Protocolo aconseja contar con varios elementos, los cuales son: declaración de la presunta víctima, declaración del presunto torturador, visita a los lugares donde se presume acaecieron las torturas, fotografías, etc. elementos con los que no han contado las señoras peritos, porque el Protocolo de Estambul no los ordena, lo cual es cierto, en la misma medida en que lo es, que el repetido manual sólo contiene consejos o recomendaciones sin ningún carácter vinculante. De lo que se desprende que las alegadas torturas no se han acreditado en lo más mínimo.

d) Debemos tener presente, además, que las declaraciones de los dos detenidos Eleuterio-Asunción que han intervenido en este juicio no han sido declaradas inválidas en ninguno de los cuatro procedimientos en los que consta sus condenas por execrables actos terroristas, pues se tuvieron en cuenta las restantes pruebas contra ellos dirigidas. Por orden cronológico, tales sentencias son las siguientes:

1.- Sentencia nº 6/12, de fecha 13-2-2012, dictada por esta Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el rollo de Sala nº 67/07, dimanante del sumario

nº 66/07 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 (intento de asesinato a través de artefacto explosivo "lapa" de un escolta de un concejal de Galdácano: folios 44 a 80 del rollo de Sala).

2.- Sentencia nº 30/12, do fecha 19-4-2012, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el rollo de Sala nº 66/11, dimanante del sumario nº 46/11 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 (intento de homicidio a través de artefacto explosivo "lapa" del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM014: folios 2050 a 2075 de la causa).

3.- Sentencia nº 4/13, de fecha 22-1-2013, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el rollo de Sala nº 83/11, dimanante del sumario nº 52/11 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 (integración en la organización terrorista ETA, como miembros del comando "Otazua" folios 2078 a 2097 de la causa). Y

4.- Sentencia nº 22/13, de fecha 23-7-2013, dictada por la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el rollo de Sala nº 47/11, dimanante del sumario nº 4 8/11 del Juzgado Central de Instrucción nº 4 (asesinato terrorista y estragos terroristas, a través de artefacto explosivo "lapa", con fallecimiento del Inspector del Cuerpo Nacional de Policía Sr. Juan Ramón: folios 2160 a 2185 de la causa).

e) Pero en el caso que juzgamos hemos de realizar varias matizaciones, a tenor de la ya consolidada doctrina jurisprudencial sobre el valor de las declaraciones de los implicados antes de pasar a disposición judicial. En este sentido, la STS. nº 726/11, de 6-7-2011, expresa que "las manifestaciones que constan en el atestado no constituyen verdaderos actos de prueba susceptibles de ser apreciados por los órganos judiciales"; por lo que "únicamente las declaraciones realizadas en el acto del juicio o ante el Juez de Instrucción como realización anticipada de la prueba y, consiguientemente, previa la instauración del contradictorio, pueden ser consideradas por los Tribunales penales como fundamento de la sentencia condenatoria". Añade que "la ratificación de una declaración anterior supone la asunción de su contenido; pero cuando ello implica una confesión del imputado debe recordarse que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone,

artículo 406, que la confesión del procesado no dispensará al Juez de la práctica de las diligencias necesarias "...a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito". De idéntico tenor es lo establecido en la S.T.S. nº 483/11, de 30-5-2011, al indicar que "la declaración policial no ratificada ante el Juez de Instrucción ni en el juicio tiene la consideración de mera información de atestado, sin efecto probatorio alguno; porque la utilización como prueba de cargo del contenido del interrogatorio policial de un imputado practicado en un contexto inquisitivo contradice los principios sustanciales del proceso debido".

El Tribunal Supremo a partir del año 2010, acorde con la doctrina ya consolidada del Tribunal Constitucional, viene manteniendo sin ambages que las declaraciones policiales, al formar parte del atestado, tienen, en principio, el valor de denuncia, como señala el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que, como el atestado se erige en objeto de prueba y no en medio de prueba, tales declaraciones sólo pueden ser tenidas por material incorporado al atestado para encauzar la investigación policial, careciendo por ello de eficacia probatoria por sí mismas. Así se ha pronunciado la S.T.S nº 429/13, de 21- 5-2013, y se reitera en la S.T.S. nº 608/13, de 17-7-2013, en la que se indica: "En suma, la posibilidad de tener en cuenta las declaraciones prestadas extramuros del juicio oral no alcanzan a las declaraciones prestadas en sede policial". Abundando en la materia, la S.T.S. nº 848/14, de 9-12-2014, establece con nitidez que las manifestaciones que constan en el atestado no constituyen verdaderos actos de prueba susceptibles de ser apreciadas por los órganos judiciales. Por consiguiente, solo las declaraciones realizadas en el acto del juicio, o ante el Juez de Instrucción como realización anticipada de la prueba y, consiguientemente, previa la instauración del contradictorio, pueden ser consideradas por los Tribunales como fundamento de la sentencia condenatoria... y ello fundamentalmente porque se efectúan en presencia de la autoridad judicial, único órgano que, por estar institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria".

En el supuesto analizado, las declaraciones policiales prestadas por los detenidos en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, y cuando se encontraban

en situación de incomunicación, gozan de pleno valor a efectos probatorios por dos circunstancias. En cuanto a las de Eleuterio, porque fueron íntegramente ratificadas ante el Magistrado Instructor cuando declaró como imputado, no pudiéndose conceder valor exculpatorio a la postrera retractación que efectuó el día 15-3-2011 (folios 685 y 686 del rollo de Sala), aparte de que otros medios probatorios confirmaron y reforzaron su protagonismo en los actos por los que ha sido enjuiciado en otros procedimientos. Y en cuanto a Asunción, porque a pesar de su constante negación de hechos, los datos obtenidos con independencia de sus declaraciones han conseguido reunir un conjunto de pruebas determinantes de sus condenas en otros procedimientos.

De ahí que podamos valorar sus declaraciones policiales sobre la supuesta participación delictiva del acusado en los dos delitos de conspiración que se le atribuye por la acusación personada.

D) Prosiguiendo con el estudio de las restantes pruebas testificales practicadas sobre la posible comisión de la conspiración para el asesinato terrorista que nos ocupa, debemos hacer mención a las declaraciones de los Guardias Civiles nº NUM015 y nº NUM016, que participaron en la vigilancia y seguimiento del acusado en el parque Larreagaburu de Bilbao el 17-12-2009. Para el Ministerio Fiscal, dicha visita estuvo planificada para observar en el terreno el lugar idóneo para realizar los disparos a distancia contra las personalidades que acudirían, seis meses después, al acto de homenaje al Inspector de Policía Sr. Juan Ramón, en el primer aniversario de su trágica muerte, cubriendo la huida sin ser interceptado. Tales funcionarios efectuaron el día mencionado el acta de vigilancia que aparece en los folios 1730 y 1731 de las actuaciones, con el siguiente tenor literal:

"El jueves día 17 de diciembre de 2009, en el marco de las investigaciones realizadas sobre Eugenio para esclarecer su presunta vinculación con la organización terrorista ETA, se procedió a establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento policial.

Producto del mismo se observó al objetivo salir de su domicilio habitual, sito en la c/ Gervasio de Loyola nº NUM002 de Galdakao (Bizkaia) a las 08:22 horas.

Que tras salir de su domicilio, monta en su vehículo particular Peugeot 307 de color gris con matrícula PHP siendo el único ocupante, el cual se encontraba estacionado en la misma calle e inicia la marcha, circulando hasta la calle Capuchinos nº 6 de Bilbao (Bizkaia), lugar de trabajo del objetivo.

Que tras estacionar el vehículo en la citada calle de Bilbao, se introduce en su lugar de trabajo y permanece allí por un breve espacio de tiempo, saliendo a continuación y desplazándose en su vehículo particular hasta el Polígono Industrial "El Juncal", sito en la localidad de Trápaga (Bizkaia), donde accede a un taller mecánico, durante unos quince (15) minutos.

Que sobre las 09:50 horas, sale del taller y se desplaza hasta la localidad de Portugalete, estacionando su vehículo en la Avda. Bernardo Castell, no pudiendo realizar un control directo sobre el objetivo, por lo que se centra el dispositivo policial sobre el vehículo, con la finalidad de detectar de nuevo al objetivo cuando vaya a recogerlo.

A las 10:15 horas se detecta de nuevo al objetivo introduciéndose en su vehículo, iniciando la marcha en dirección a Bilbao. Durante el desplazamiento por la A-8 todo el trayecto fue normal, sin embargo una vez que accede a la localidad de Bilbao, comienza a realizar una serie de giros repentinos y contramarchas sin motivo aparente, por lo que el dispositivo de seguimiento aumenta las medidas de seguridad para no ser detectados.

Sobre las 10:40 horas, Eugenio estaciona su vehículo en el parking reservado para minusválidos del parque Larreagaburu, por lo que el dispositivo de vigilancia no puede realizar un control directo sobre el objetivo, dado que el acceso al citado parque está restringido a vehículos, siendo únicamente autorizado el acceso a vehículos de minusválidos, servicios municipales y de emergencias.

Por dicho motivo, el dispositivo policial se centra en la única salida en vehículo del citado parque, observando a las 10:49 horas la salida del Peugeot 307 de color gris, matrícula PHP, conducido y siendo el único ocupante Eugenio, dirigiéndose por el itinerario lógico hasta la localidad de Galdácano, estacionando el vehículo en la c/ Ignacio de Loyola".

Hemos de recordar que el acusado, en su declaración en el plenario, manifestó que dicho día acudió al aparcamiento del parque Larreagaburu de Bilbao (conocido por Mina del Morro) por motivos de trabajo, y para llegar al lugar tuvo que repetir varias maniobras en su coche porque inicialmente no sabía cómo llegar al lugar. Los funcionarios actuantes se ratificaron en el acta que confeccionaron, añadiendo el primero que les extrañó los giros repentinos y las contramarchas que realizó el acusado en varias rotondas de Bilbao antes de subir al parque, cuyo vehículo fue estacionado en un aparcamiento al que no tienen acceso sino las personas autorizadas; dijo que allí estaría el acusado casi diez minutos, pero no vio lo que hacía, a pesar de que fueron caminando al lugar donde estaba el coche del acusado.

Por tanto, nadie ha observado que el acusado estuviera efectuando un estudio del terreno que, supuestamente, sirviera para guarecerse, apuntar y disparar a personas el día del homenaje al policía fallecido desde algún punto determinado, que luego le permitiera huir sin riesgo de ser sorprendido. Por lo que cobra vigor su alegación sobre que estaba allí realizando su trabajo de perito de una empresa de seguros.

Su tesis defensiva viene corroborada por la declaración del testigo Silvio, compañero de trabajo y superior del acusado desde 2008, quien declaró que entre los cometidos de Eugenio como perito de coches, se encarga de tasar vehículos en los talleres, hacer seguimientos de las reparaciones y examinar el lugar de los siniestros, para determinar la causa de los mismos e investigar posibles fraudes. Y precisamente éste fue el motivo del desplazamiento del acusado, el día señalado, al parque Larreagaburu, para averiguar la veracidad o no de un posible fraude al denunciarse el robo en un coche de un aparato de música de elevado importe, a través de la búsqueda de indicios, como

restos de cristales o vídeo-cámaras instaladas. Labor que no pudo documentar, bajo el argumento de, al haber transcurrido más de cinco años desde que ocurrió el siniestro, los documentos del concreto siniestro se destruyeron.

E) En relación a las cualidades personales del acusado como tirador de precisión y cazador experimentado, ninguna prueba existe sobre tales extremos. Así, en relación a la declaración de testigo Guardia Civil nº NUM017, Teniente Jefe Accidental del GIC (Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya), éste ratificó en el juicio el oficio que remitió al Juzgado Central de Instrucción nº 6, obrante al folio 1663 de la causa, que dice lo siguiente:

"Se participa que tras librar oficio a las tres federaciones de tiro (Federación Española de Tiro Olímpico, Federación Vasca de Tiro Olímpico y Federación Territorial de Bizkaia de Tiro Olímpico), solamente existen datos de registro de licencia federativa en la Federación Territorial de Bizkaia de Tiro Olímpico (Sección de Precisión), desde el 7 de enero de 1988, no pudiéndose aportar antecedentes sobre la fecha de baja, por lo que no se puede saber con exactitud todo el periodo durante el cual Eugenio estuvo federado en dicha modalidad deportiva, debido a que sólo obra dicho registro anterior a la informatización de los mismos.

En cuanto a la información facilitada por el Ministerio de Defensa, tan sólo constan los datos habituales de filiación sobre la prestación del antiguo Servicio Militar, en el Tercio de la Armada como Infante de Marina, no apareciendo reflejados en la ficha militar alguno de los datos solicitados".

Dicho testigo manifestó en el juicio que en el Ministerio de Defensa no hay documentación que acredite que el acusado tenga pericia en el manejo de las armas que adquirió el acusado durante su estancia en el servicio militar obligatorio en la Infantería de Marina, sin que tampoco se tenga constancia de que haya participado en alguna competición de tiro.

Relacionado con lo anterior, el testigo Fausto, compañero de trabajo del acusado, con el que comparte su afición a la caza, declaró que practican la caza menor con perro, que es la que actúa con aves, conejos y liebres, en tanto que la caza mayor está relacionada con jabalíes, ciervos y otros animales grandes; indicó que cuando van a cazar nunca han utilizado miras telescópicas, pues éstas no se usan en la caza menor. Sostuvo que su compañero acusado es un tirador normal, no de élite, y no ha participado nunca en competiciones de tiro. En consonancia con lo anterior, sólo nos queda expresar que en el folio 842 de la causa constan las tres licencias de armas tipo "E" que tiene el acusado, con sus correspondientes guías de pertenencia.

Por lo demás, a la causa se incorporó documentación sobre la estancia en el servicio militar del acusado (folio 939), sin que en momento alguno se aluda a su alegada y no probada condición de tirador de élite, ingresando en la Infantería de Marina el 10-3-1985 y licenciándose el 31-5-1985, siendo su ocupación la de monitor de judo.

En el rollo de Sala figuran incorporados determinados documentos, no impugnados, que demuestran la afición del acusado por la caza y su relación con la actividad cinegética, sin que de ellos puedan extraerse las especiales condiciones de tirador de precisión y experimentado a que hacen referencia los informes de la Guardia Civil, luego trasladados al escrito de conclusiones definitivas de la acusación personada. Así, en los folios 258 a 416 aparecen una guía del examen de aptitud para cazar y un cuestionario con respuestas válidas para el examen de caza, elaborados por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. Relacionado con la anterior documentación está el listado de cazadores de Vizcaya, emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública y que data del 22-5-2004, en la que el acusado figura entre las cinco personas con mejor puntuación de entre los 2 82 cazadores que se examinaron de unas pruebas teóricas -que no prácticas-, cuyo contenido consistía en la identificación de especies y la normativa aplicable (folios 843 a 847 de la causa). Finalmente, en el folio 434 del rollo de Sala obra una certificación expedida por el Secretario de la Federación Territorial de Vizcaya de Tiro Olímpico, acreditativa de que el acusado fue dado de alta el 7-1-1988, no constando la fecha de la baja, pero ya no figura en la base de datos creada en 1996 y 1997; por otro lado, no

dispone dicha federación de información acerca de la participación del acusado en competencias o entrenamientos deportivos.

Para terminar este examen documental, debemos precisar que ningún efecto incriminatorio tiene la circunstancia de que en el registro del domicilio del acusado se hallara 4 CDs sobre un curso de tiro con rifle (folio 1003 de la causa), dada su condición de cazador y su posesión de tres escopetas con sus respectivas licencias y guías de pertenencia vigentes en el momento de su detención.

F) En referencia a las pruebas periciales practicadas, resultó evidente la inidoneidad de las armas y demás elementos relacionados con éstas incautados al acusado y del arma intervenida en la operación contrterrorista llevada a cabo en la localidad de Bermillo de Sayago (Zamora) en la noche del 9-1-2010, para la comisión de los supuestos asesinatos de naturaleza terroristas de cuya comisión en grado de conspiración se acusa a Eugenio.

a) Respecto a las tres escopetas y la mira telescópica incautadas al acusado en su domicilio, son perfectamente legales y válidas, como lo establece la primera pericial realizada. Así, las conclusiones del informe pericial balístico emitido el 19-8-2014 por los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con tarjetas de identidad números NUM018 y NUM019 (folios 1686 a 1696), son las siguientes:

- "La escopeta de dos cañones yuxtapuestos marca "Ascensio Zabala", la escopeta de dos cañones yuxtapuestos marca "Bost", los cañones suplementarios de la misma y la escopeta de dos cañones superpuestos marca "F.S.C.", todas ellas del calibre 12/70, se encuentran en correctas condiciones de funcionamiento, por lo que disparan eficazmente la munición adecuada a su calibre y características.

- La mira telescópica marca "Norica" se encuentra en correctas condiciones de funcionamiento; está diseñada para ser utilizada en armas largas rayadas de poca

potencia, fundamentalmente carabinas de aire comprimido, y resulta incompatible para ser utilizada con las escopetas y cañones de escopetas anteriormente referenciados".

Sobre dicha pericial, los mencionados peritos complementaron su informe en el plenario, indicando que la mira telescópica incautada al acusado sirve para armas de media categoría, de aire comprimido; que el rango de utilización de este tipo de miras alcanza hasta los 200 metros, pero en cualquier caso hasta los 550 metros no llega, ni siquiera hasta los 300. Como ya hemos expresado, consta en el folio 842 de la causa las tres licencias de armas y las guías de pertenencia de tales escopetas.

b) Respecto a la carabina incautada en la furgoneta intervenida en Bermillo de Sayago (Zamora), su inadecuación al uso que se le quería dar según el atestado de la Guardia Civil, seguida del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal, resulta igualmente evidente. Así, las conclusiones del informe pericial balístico emitido el 8-7-2015 por los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con tarjetas de identidad números NUM020 y NUM019 (folios 981 a 1987), son las siguientes:

- "Ni la carabina tipo Mosin Nagant, modelo M-44, del calibre 7,62 x 54 R, carente de número de identificación, ni el visor de punto rojo marca Hakkoo que tiene, resultan adecuados para efectuar disparos con precisión a la distancia de 550 metros.

- El alcance máximo de la munición que dispara esta carabina es aproximadamente de 2.000 metros a bala perdida y en condiciones ideales (tiro parabólico con inclinación de 30°), pero en cualquier caso, siempre sin control del punto de impacto por parte del tirador.

- La mira telescópica de la marca No rica, así como su montura de chapa, resultan incompatibles para ser utilizadas en la carabina Mosin Nagant mencionada".

Sobre dicha pericial, los mencionados peritos complementaron su informe en el plenario, indicando que el alcance de una bala disparada por dicha carabina puede

llegar a los 200 metros, concretando que tiene un alcance de 250 metros y una longitud de 1830 metros; que el arma usada por un francotirador es la versión larga de la carabina examinada; dicha carabina podría disparar con más precisión incorporando una mira diferente a la incautada, pero para ello habría que dotar al arma de unas bases diferentes a las que lleva, es decir, que habría que hacer más modificaciones, sin que tal carabina presente signos de haber sido manipulada para poder acoplar otro tipo de mira. Insisten en que dicha carabina no cumple ninguno de los estrictos estándares de calidad exigidos a un arma de precisión, presentando la analizada la palanca de cerrojo por la derecha, por lo que es apta para ser utilizada por las personas diestras. Sobre e te particular, en el ejercicio de su derecho a la última palabra, el acusado manifestó que era zurdo.

G) Tampoco tiene efectos inculpatórios del acusado, puesto que ninguna referencia se hizo al mismo, la testifical practicada al Guardia Civil nº NUM021, que participó en la incautación de una furgoneta de la marca Iveco modelo Daily DC con matricula francesa WT en Bermillo de Sayago (Zamora) el día 9-1-2010 por la noche, en la cual se intervino un rifle, además de una pistola, un revólver, material explosivo y electrónico, dos troqueladoras y placas de matricula españolas y francesas. Debido a dicha interceptación, fueron detenidos su conductor y la persona que hacía labores de lanzadera y contravigilancia en otro vehículo, de la marca Opel Corsa y también con placas de matricula francesas (folios 1830 a 1926 de la causa). Ambos militantes de ETA han sido condenados por estos hechos en sentencia nº 3/13, de fecha 18-1-2013, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el rollo de Sala nº 84/11, dimanante del sumario nº 52/11 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 (folios 2130 a 2156 de la causa).

H) Como consecuencia de todo el elenco probatorio analizado anteriormente, podemos concluir que en modo alguno se ha probado la participación del acusado en los actos criminales, constitutivos de dos presuntos delitos de asesinato terrorista en grado de conspiración, que se le vienen atribuyendo. Por un lado, las declaraciones de los condenados miembros de ETA Eleuterio y Asunción, sobre las instrucciones y citas encomendadas por el dirigente de ETA Octavio, alias "Zanagollas", para que se

reunieran con una persona en el monte Ganekogorta el domingo 7-3-2010 o el domingo 14-3-2010, a cuyas citas no se presentó dicha persona, para organizar el atentado contra el entonces Lehendakari Carlos Miguel y el Consejero del Interior Juan Pedro, no nos lleva al acusado, puesto que en ningún momento se le ha observado en esos días subir a dicho monte en busca de aquellos miembros del comando "Otazua". Por otro lado, las características personales dadas por "Zanagollas" para que supieran que estaban en presencia de la persona con la que iban a reunirse, no coincide en esencia con las de 1 acusado, puesto que éste, a pesar de tener una edad rodante loó 45 años y tener unos kilos de más, según se aprecia en sus fotografías de la época de los hechos, no se irrita de un individuo de estatura baja, ni se ha acreditado que sea un tirador selecto. Además, el fusil con mira telescópica al que se hace referencia en la reunión con "Zanagollas" no aparece en las actuaciones, especialmente cuando no se ha acreditado que los disparos del supuesto atentado iba a tener lugar desde el bilbaíno parque Larreagaburu, en un punto de distancia del lugar de la celebración del acto al que acudirían las posibles víctimas distante unos 300 metros del sitio donde se apostaría el tirador. En este sentido, las conjeturas policiales sobre la estancia del acusado en dicho parque, durante nueve minutos, en la mañana del 17-12-2009, seis meses antes del aniversario que pretendía utilizarse para cometer los asesinatos y tres meses antes de las supuestas citas frustradas en el monte Ganekogorta, no pasan de ser meras hipótesis policiales, al no observar los funcionarios que cubrieron el seguimiento qué es lo que hacía el acusado, que goza de la cobertura laboral de presencia ya expresada.

En suma: como establecen las STS. nº 556/06, de 31-5-2006, y nº 1140/10, de 29-12-2010, para que concurra la conspiración ha de existir un proyecto criminal definido y concreto o, si lo hay, que no esté pendiente de perfilar en la | mayoría de sus extremos; la voluntad de delinquir ha de ser firme y concreta, que se manifieste en una realidad material y tangible, no soportada por meras conjeturas o suposiciones. Por ello, la conspiración exige concreción del acto delictivo, debe estar dirigida a un delito concreto, determinado y perfilado en todos sus aspectos, y además que éste sea viable. Tales características no se producen en el caso examinado, donde hemos sometido a escrutinio la conducta del acusado, el cual no encaja, ni por sus cualidades

personales, ni por sus aficiones cinegéticas, ni por las características de las armas y la mira telescópica que posee, ni tan siquiera por las reducidas aptitudes del arma incautada en Bermillo de Sayazo, con la magnitud del acto delictivo que se le viene atribuyendo. Por cuyas razones habrá de ser absuelto de estos delitos de conspiración terrorista.

CUARTO.- Individualización de las penas a imponer.

Respecto a las penas con las que debe de ser castigado el acusado Eugenio por la comisión del delito de pertenencia a organización terrorista, previsto en los artículos 571 y 572.2 del Código Penal actual (artículo 571.2 del Código Penal, en su redacción vigente en la época de comisión de los hechos), inicialmente y en abstracto se sitúan en la privación de libertad, con una horquilla que discurre desde 6 años hasta 12 años de prisión, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 14 años, e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, como prevé el artículo 579 bis 1 del Código Penal actual (artículo 579.2 del Código Penal, en su redacción vigente en la época de comisión de los hechos).

En el supuesto que examinamos procede imponer al acusado las penas de 7 años de prisión, 7 años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público, e inhabilitación absoluta por tiempo de 13 años, cercanas a las mínimas legalmente aplicables y en todo caso situadas en la mitad inferior de las legalmente previstas, atendiendo a la primariedad delictiva del interesado pero sin poder obviar la persistencia en el tiempo del delito.

Por lo demás, al no encontrarse el delito por el que le condenamos en el elenco de tipos establecido en el artículo 57 del Código Penal, no procede hacer pronunciamiento alguno sobre prohibición de aproximación al lugar de los hechos y a las víctimas.

QUINTO.- Costas procesales.

Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de delito, como preceptúa el artículo 123 del Código Penal. En el caso de autos se impondrá al acusado la mitad de las costas procesales, al ser declaradas de oficio las costas causadas por los hechos por los que ha sido absuelto.

En atención a lo expuesto,

FALLAMOS

Que condenamos a Eugenio, como responsable en concepto de autor, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN TERRORISTA, a las penas de SIETE AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA TODO OFICIO O CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE SIETE AÑOS e INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR TIEMPO DE TRECE AÑOS, con expresa imposición de la mitad de las costas procesales generadas.

Que, en cambio, lo absolvemos de la comisión de los DOS DELITOS DE ASESINATO TERRORISTA EN GRADO DE CONSPIRACIÓN de los que venía siendo acusado, con declaración de oficio de la mitad de las costas devengadas.

Para el cumplimiento de las penas impuestas, se abona al acusado todo el tiempo que ha estado privado de libertad preventivamente en esta causa, que figura en el encabezamiento de esta resolución.

A los efectos previstos en el artículo 861 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se prorroga hasta la mitad de la pena impuesta la prisión provisional que afecta al acusado, que sigue figurando como preso preventivo en este procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO, estando celebrando audiencia pública el día de su lecha. Doy fe.